LA RESISTENCIA SILENCIOSA:

RELATOS Y TRANSFORMACIONES EN SAMANIEGO (1997-2020)

ANNA SOFIA SANTACRUZ CHAVES

DIRECTOR: ALEJANDRO CARVAJAL PARDO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

DICIEMBRE 2024

Agradecimientos

Este trabajo es la conclusión de una de las etapas más bonitas de mi vida así que inicialmente quiero agradecer a Dios, quien siempre guió mis pasos, me dio fortaleza y oriento mi vocación al servicio. A el todo.

A mi alma mater, mi universidad Javeriana, que me abrió las puertas a un mundo que desconocía y propicio la construcción de una persona íntegra, apasionada y lista para servir. Gracias por cada dia durante casi seis años alegrar mi día con tus paisajes, tus animalitos, tus atardeceres, tu tranquilidad.

Agradezco a cada docente que hizo parte de mi enseñanza y que con su ejemplo y conocimiento me siguieron inspirando a crecer y conocer de mi profesión. También a esos docentes que, sin querer, me retaron a demostrar(me) que si podía.

A mi monitor Alejandro, quien también fue uno de mis maestros y me conoció en el proceso, gracias por su acompañamiento, su paciencia y sus consejos para este trabajo. No pude haber tenido un mejor mentor.

A veces, consideramos que las amistades surgen desde la infancia y las que construimos después duran poco y aunque este largo camino trajo a mí, algunas amistades pasajeras hubo otras que, aunque el tiempo pasó se quedaron y han sido mi apoyo vital, a mi Maria que esta siempre que necesito ayuda, por escucharme y aconsejarme, por ser la persona que no me juzga y que siempre piensa en mi bien y en que seamos exitosas, gracias por ser esa hermanita y mejor amiga. A Santi gracias por estar, por permanecer, por disfrutar a mi lado la etapa más linda y por siempre estar dispuesto a dar un consejo y a ayudar. A Isa y Kelly porque a pesar de la distancia estuvieron en cada momento importante con sus palabras de apoyo y amor.

También merecen OBVIAMENTE un gran agradecimiento papá y mamá por confiar en mí, porque estuvieron con sus consejos, con su amor, con sus visitas, siempre a mi lado. Porque me permitieron llevar este proceso a mi ritmo y siempre me alentaron a salir adelante, a ustedes que construyeron desde joven este amor por mi país y la búsqueda de querer hacerlo mejor, gracias, los amo. A alejita la abrazo y le agradezco pues fue mi compañera en noches de trabajos largos y fue mi confidente en los primeros semestres que la angustia y el sentimiento de no poder más se apoderaban de mi.

La vida nos trae diferentes maestros en distintas formas y en esta etapa debo agradecer a Moon, quien fue vital en este proceso, por ser mi compañero de aventuras, pero también quien me enseñó a centrarme, a seguir en este camino, a no darme por vencida, a luchar por lo que quiero y de alguna forma ayudarme a ver la luz. Gracias, por ayudarme a conocer mi potencial y hacerme sentir siempre empoderada. Esto no hubiera sido igual sin ti.

Un agradecimiento especial a Amarú y Dante, las pequeñas almas que decidieron acompañarme en este tramo de la vida y que muchas veces en la soledad me hicieron sentir mejor.

Para mí misma, un reconocimiento especial, no fue un camino fácil, hubo momentos donde nos sentimos derrotadas, otros donde estábamos en la cima. Gracias por seguir en este sube y baja de emociones y experiencias. Ahora, estás finalizando lo que algún día viste tan lejano, estamos a un paso de convertirnos en lo que soñamos ser y desde aqui, solo vienen grandes cosas. Que este sea el inicio de una vida de méritos y de seguirnos formando para ser mejor. Te abrazo por todo lo que vivimos.

Por último, quise dejar el agradecimiento a todas esas personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, perdón por todo lo que, por generaciones, han tenido que sufrir, pero les agradezco por dejar la huella y permitir que ahora seamos mas consientes de

nuestra historia y digamos basta. Algún día por ustedes, veremos un país mejor y sin víctimas.

A mi tierra Nariño, que, aunque estuve alejada tanto tiempo siempre llevo en mi corazón, prometo siempre trabajar por y para ti.

Para todos los anteriores solo tengo por decirles que han construido parte importante de mi ser.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 7

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11

ESTADO DEL ARTE 17

MARCO CONCEPTUAL 28

METODOLOGÍA 37

- UNIDAD DE ANÁLISIS 37
- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 38
- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 39
- PROCEDIMIENTO 40
- CONSIDERACIONES ÉTICAS 41

CAPÍTULO I 45

- ANTECEDES DEL PROCESO DE RESISTENCIA CIVIL EN SAMANIEGO 45
- CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA CIVIL ANTES DEL ACUERDO 52
- CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA CIVIL DESPUÉS DEL ACUERDO 56

CAPÍTULO II 61

- COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA CIVIL ANTES Y POST ACUERDO DE PAZ. 61

CONCLUSIONES 65

BIBLIOGRAFÍA 69

WEBGRAFÍA 73

ANEXOS 74

- CUESTIONARIO (ANEXO 1) 74
- CONSENTIMIENTO INFORMADO (ANEXO 2) 78

Los asesinos no han podido exterminarnos y no lo lograrán porque aquí hay un vínculo de fuerza y de alegría, y de amor a la tierra y a la vida que los asesinos no pudieron vencer

Héctor Abad Faciolince – El olvido que seremos

Introducción

El conflicto armado es una lucha principalmente violenta que involucra a dos o más grupos quienes se enfrentan dentro de un país o entre naciones para lograr distintos objetivos. En el caso colombiano ha marcado profundamente la historia del país y se ha prolongado desde mediados del siglo XX a lo largo de todo el país, afectando principalmente zonas rurales apartadas en las que la presencia del estado ha sido deficiente o nula.

Cuando se habla del inicio de El conflicto armado interno nos situamos oficialmente en 1964 con la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)[1] como respuesta a la exclusión política y con objetivos de lucha por reformas sociales, políticas y económicas, a las cuales se sumaron otros grupos guerrilleros emergentes como el Ejército de liberación nacional (ELN), M-19, Ejército popular de liberación (EPL). En esa línea, en este conflicto se han involucrado diversos actores, entre los que se destacan además de los grupos guerrilleros y el Estado, los paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes que emergieron con la llegada del narcotráfico en los 80s. En el caso guerrillero la adopción de ese negocio hizo que encontraran un nuevo método de financiación y que su proyecto revolucionario se expandiera a más zonas, propiciando a su vez el surgimiento de ejércitos privados que tenían como objeto proveer seguridad ante la amenaza insurgente.

De esta manera, diversos factores han sido las causas del conflicto y han contribuido a su intensificación en el territorio, destacándose especialmente la lucha por el control territorial y la economía ilegal, vinculada principalmente al cultivo y tráfico de cocaína. A lo

[1] Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) fueron un grupo guerrillero colombiano de extrema izquierda que surgió con la idea de luchar contra la desigualdad social y promover la reforma agraria, inspirados en ideas marxistas-leninistas.

largo de seis décadas, estas dinámicas no solo han generado altos niveles de violencia y constantes afectaciones a la población civil, sino que también han evidenciado la falta de garantías para el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Las comunidades más vulnerables, como campesinos, indígenas y afrodescendientes, han sufrido las consecuencias de forma particularmente profunda, dejando cicatrices imborrables en sus territorios y vidas.

En 2016, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC representó un punto de inflexión en la historia reciente del conflicto y puso fin a casi 60 años de enfrentamiento armado. Entre los aspectos más relevantes de este acuerdo se incluyen el cese bilateral del fuego, el desarme de las FARC, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la implementación de programas de sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. No obstante, la implementación de estos acuerdos ha sido desigual y ha enfrentado múltiples desafíos, especialmente en los departamentos más afectados, alejados y desatendidos por el Estado como Cauca, Guaviare, Chocó y Nariño.

Nariño, se ubica en el suroccidente de Colombia en límites con Ecuador y el océano pacifico, es una zona culturalmente diversa, con una mezcla de poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, la agricultura es una parte importante de la economía, con cultivos como café, caña de azúcar y plátano que son exportaciones importantes, y su geografía se caracteriza por su biodiversidad en fauna y flora así como en su riqueza hídrica y la confluencia de zonas costeras, montañosas y selváticas lo que lo hacen un territorio ideal para diferentes actividades y lo ubican como un lugar con una posición privilegiada. Sin embargo, este departamento también ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por el conflicto armado siendo escenario de constantes enfrentamientos entre guerrillas,

paramilitares y narcotraficantes, debido, en parte, a la presencia de extensas áreas de cultivos ilícitos y su posición estratégica.

Posterior a la firma del acuerdo, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, la violencia y el control territorial por parte de grupos armados persistieron en muchas zonas de Nariño, en especial en la zona costera en municipios como Tumaco y el Charco y en la zona de la sierra en municipios como Policarpa y Samaniego. Según FUNDEPAZ[2] en su informe de 2021, se identifica que, en el departamento de Nariño a diferencia de 2019, cuando se observó una leve reducción del 9% en los incidentes de violencia sociopolítica, en el año 2020 se presenció un significativo aumento del 13% en estos actos violentos. Esta tendencia es especialmente destacada considerando las medidas implementadas por las autoridades para enfrentar la pandemia de Covid-19, que implican la reducción de las interacciones sociales a diversos niveles.

De acuerdo con FUNDEPAZ (2021) la mayoría de los responsables de esta violencia son actores sin identificar o combatientes que tampoco se adscriben a ningún grupo. Tras la desmovilización de las FARC en 2016, la violencia en la región ha aumentado debido al fortalecimiento del ELN y los grupos paramilitares, aunque el número de víctimas entre 2015 y 2016 ha disminuido considerablemente, sucesos como la masacre del 15 de agosto de 2020, donde fueron asesinados 8 jóvenes, y los enfrentamientos del 23 de marzo de 2021, evidencian la persistencia del conflicto en una lucha por el control del negocio de las drogas (Informe final de la Comisión de la Verdad, 2021).

[2] La Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ) es una organización sin fines de lucro, no confesional y apartidista, que tiene como objetivo promover el desarrollo humano sostenible en Colombia. Su propósito es contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa, fomentando la inclusión política, económica, social y cultural.

Samaniego es un municipio ubicado en el occidente del departamento de Nariño, punto de acceso hacia la zona andina, el piedemonte y el Pacífico, así como su conexión con municipios circundantes como Guachavés, Túquerres, Ricaurte, Mallama, Piedrancha, Telembí, La Llanada y Sotomayor. Tiene una economía principalmente agrícola en la que se produce café, caña de azúcar, frutas tropicales, maíz y frijol. Sin embargo, este municipio, ha sido uno de los epicentros del conflicto armado en Nariño desde finales de los años 80 con el establecimiento en 1988 del ELN; en 1989 de las FARC que se ubicaron en la zona sur del municipio donde controlaban cultivos de amapola y coca, y en los 2000 con la intrusión de las AUC para combatir a las FARC (Mouly et al. 2019)

De ese modo, en este territorio se ha vivido de cerca las consecuencias del narcotráfico y la presencia de actores armados ilegales que disputan el control de las rutas de salida de drogas y armas hacia el Pacífico. Samaniego ha sido testigo de masacres, desplazamientos forzados y una continua violación de los derechos humanos. No obstante, tras la firma del acuerdo de paz, han surgido movimientos de resistencia pacífica y organizaciones sociales que buscan contribuir en la construcción de paz desde la base comunitaria, resistiendo la violencia y promoviendo alternativas al conflicto.

Planteamiento del Problema

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, la violencia en el país no ha desaparecido por completo. Desde entonces, han persistido los ataques y enfrentamientos de otros actores armados como las disidencias de las FARC, el ELN y grupos criminales como el Clan del golfo, que han seguido afectando distintas regiones del país. Según INDEPAZ (2024)[3], solo hasta el 11 de septiembre de 2024, se han registrado 47 masacres con 168 víctimas y la situación en años previos tampoco es alentadora. De acuerdo con esta entidad las cifras han sido alarmantes: 93 masacres en 2023, 94 en 2022 y 96 en 2021. Aunque la firma del acuerdo ha generado una disminución significativa en el número total de víctimas, pasando de un promedio anual de 430.000 personas entre 2003 y 2008 a menos de 100.000 entre 2016 y 2021, la violencia sigue presente, especialmente en las zonas rurales.

En Nariño, según el sistema de información de eventos de Violencia del conflicto armado colombiano (SIEVCAC), el observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1993 y 1994, se registraron 13.206 muertes, de las cuales el 89% correspondió a la población civil, siendo los campesinos el grupo más afectado.

Asimismo, en el periodo entre 2012 y 2015, Nariño promedió 33.303 víctimas anuales, sin embargo, esta cifra se redujo a 20.585 en los cuatro años posteriores al acuerdo,

[3] El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es una ONG creada en 1984 que promueve la paz en Colombia a través de la formación, investigación y diálogo. Apoya a organizaciones étnicas y juveniles, y facilita la colaboración entre empresas, gobiernos y comunidades. Indepaz también aborda temas de seguridad ciudadana, políticas sobre tierras y derechos de las víctimas, y monitorea el conflicto y la violencia mediante su Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades.

representando una disminución tan solo del 38% lo que nos indica que Nariño seguía siendo un área crítica en medio de la confrontación.

De acuerdo con el registro único de víctimas (RUV) en Nariño se han presentado 636.475 víctimas del conflicto armado a causa de asesinatos, secuestros, desplazamiento forzado, entre otros hasta el 31 de agosto de este año. Por su parte el SIEVAC añade que en el transcurso de 2016 y febrero de 2024, se documentaron 414 asesinatos de firmantes del acuerdo, de los cuales el 10,4% ocurrieron en Nariño y dos de los casos específicamente, en Samaniego.

En ese orden, el desplazamiento forzado mostro una reducción del 42%, pasando de 31.553 víctimas en promedio anual (hablando de los cuatro años anteriores a la firma del acuerdo) a 18.181(hablando de los cuatro años posteriores a la firma del acuerdo). De esta información podemos decir que al menos 50 personas diariamente tuvieron que desplazarse desde sus territorios dentro del departamento para resguardar su vida e integridad. Entre enero y agosto de 2023, se reportaron 39.482 personas afectadas, con 501 emergencias registradas, lo que refleja la persistencia de la violencia en la región y en 2024, se estima que el 27,3% de la población en Nariño es víctima del conflicto. Aunque Tumaco y Barbacoas son los municipios más afectados, Samaniego ha vivido su propia historia de violencia y resistencia y estos datos evidencian la complejidad de la situación en Nariño, donde la paz aún parece distante.

Respecto a los afectados por minas antipersona, la oficina del Alto comisionado para la paz y el Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA)[4], mencionan que desde 1990 hasta 2023 Nariño es el tercer departamento en el país con mayor número de víctimas, con un total de 1.125 casos. En 2023, la OACP registró 39 víctimas civiles por accidentes relacionados con minas antipersona, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos en la región. Los municipios más afectados ese año fueron Tumaco, con 17 víctimas; Ricaurte, con 9; Magüí Payán, con 5; La Llanada, con 3; y Olaya Herrera, con 2. Del total de víctimas, 7 son mujeres y 32 son hombres, incluyendo 2 menores de 18 años y 19 personas pertenecen a grupos étnicos, de las cuales 12 son indígenas y 7 afrodescendientes.

Por otra parte, en 2023 la Unidad para las víctimas (UARIV) reporto que, del total de afectados en Nariño para ese año, 17.030 eran niños, niñas y adolescentes quienes se vieron afectados principalmente por desplazamiento forzado (88%) y amenazas (9%) así como también por reclutamiento (12 casos) y delitos contra la libertad y la integridad sexual de la infancia (22 casos) especialmente en municipios de la costa pacífica y la cordillera nariñense. Adicional, mencionan que aproximadamente 26.478 mujeres, 94 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas fueron afectadas por el conflicto armado en 2023.

Entre enero y diciembre de 2023, la UARIV reportó más de 19.726 afrodescendientes y 18.728 indígenas de las comunidades Awá, Pastos y Eperara Siapidara como víctimas del conflicto, con eventos concentrados en los municipios de Ricaurte, Santacruz, Samaniego, Magüí, Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera. Esta cifra representa una disminución del

[4] Datos oficiales Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA) https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas

27% en comparación con 2022. Durante el mismo año, la Defensoría del Pueblo emitió 5 alertas tempranas sobre la situación humanitaria en Nariño (3 estructurales y 2 de inminencia), en respuesta a la presencia de los grupos armados no especificados (GANE), quienes han llevado a cabo amenazas, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad y violencia sexual. Estas acciones han afectado a liderazgos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, causando rupturas en el tejido social y generando emergencias humanitarias, con desplazamientos forzados y confinamientos.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 15 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el departamento en 2023, de los cuales tres eran mujeres, cuatro afrodescendientes y cinco indígenas. Además, se reportaron 10 masacres en Nariño, que resultaron en 31 víctimas mortales, siendo Tumaco e Ipiales los municipios con mayor concentración de estos crímenes, con 4 masacres cada uno.

No obstante, se debe considerar que existe un subregistro en el departamento respecto a los hechos mencionados lo anterior, por el desconocimiento de las rutas de atención y el temor a posibles represalias por parte de los grupos armados, sumado a la incapacidad o falta de capacidad institucional en las subregiones de Piedemonte y Pacífico que agravan la situación. Esto se debe a los constantes eventos de desplazamientos masivos, confinamientos, emergencias simultáneas y amenazas persistentes, así como a la falta de actualización y asignación de recursos económicos adecuados para los planes de contingencia y prevención (UNOCHA, 2023).

Ahora bien, como se mencionó en Samaniego, la historia del conflicto está marcada por momentos de intensa confrontación entre los grupos armados ilegales y las fuerzas del

Estado. A diciembre de 2022, se registraron 20.458 víctimas reconocidas bajo la Ley 1448 de 2011, incluyendo actos de desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, homicidios y actos terroristas. Entre enero y agosto de 2023, más de 1.000 campesinos de diversas veredas llegaron al casco urbano de Samaniego en busca de protección, lo que evidencia la constante amenaza que enfrenta la comunidad. Según INDEPAZ (2024), cinco líderes sociales han sido asesinados en el municipio desde la firma del acuerdo en 2016 hasta febrero de 2024. Además, de acuerdo con la OCHA (2023), en Samaniego hay 684 personas confinadas debido al conflicto, especialmente en la zona del resguardo indígena, y el municipio ha reportado 3.617 víctimas del desplazamiento forzado.

A pesar de los intentos de construir paz, Samaniego y gran parte de Nariño han sufrido históricamente del aislamiento y el abandono estatal lo que ha contribuido a su marginación, y ha permitido que el conflicto se mantenga durante tanto tiempo. Aun así, surge el interés por dar respuesta a la pregunta *¿Qué evolución han tenido los procesos de la resistencia pacífica en el municipio de Samaniego, Nariño en el marco del conflicto armado y del postconflicto (1997– 2020)*[5]*?*

El objetivo general de la presente investigación fue *identificar los cambios en los procesos de resistencia civil en el marco del conflicto armado en Samaniego, Nariño posterior a la firma del acuerdo de Paz con las FARC.* Para su desarrollo, se buscó (1) Caracterizar el proceso de resistencia civil en Samaniego Nariño antes y posterior a la firma del acuerdo de paz con las FARC; y (2) comparar los procesos de resistencia civil antes y posterior a la firma del acuerdo de Paz con las FARC en Samaniego Nariño.

[5] Se toma este lapso de fechas porque es en 1997 con las marchas y la conformación del Consejo Municipal de Paz que se empieza a observar procesos de resistencia pacifica

Esta investigación pretendió obtener conocimientos que continúen enriqueciendo las intervenciones y discusiones que se dan en torno a los procesos de resistencia civil en el marco del conflicto armado interno colombiano. Asimismo, a nivel político, esta investigación pretende entender la evolución de los procesos de resistencia pacífica en Samaniego entre 2016 y 2020 y comprender cómo las comunidades han enfrentado los retos del posconflicto a partir de alternativas que recurren al dialogo, la comunicación y la acción colectiva.

A nivel de la ciencia política, este estudio busca contribuir en los estudios sobre resistencia civil, ya que si bien existen ciertos estudios que abordan el conflicto armado y sus efectos en la región, la mayoría se enfoca un poco más en las dinámicas de violencia y la presencia de los actores armados dejando así en un segundo plano las iniciativas comunitarias de resistencia pacífica. El "vacío" me resulta especialmente importante para ayudar a otros territorios históricamente afectados por el conflicto armado a construir paz.

A nivel social, esta investigación busca en un contexto en el que la violencia sigue siendo una amenaza latente, analizar las estrategias de las comunidades para fortalecer la paz y resistir de manera no violenta. Este estudio busca visibilizar las experiencias de resistencia, documentar sus logros y desafíos y contribuir al entendimiento de las formas en las que las comunidades de Samaniego han enfrentado las nuevas dinámicas de paz en el postconflicto.

Estado del Arte

A continuación, para efectos de un mejor conocimiento acerca de lo que antecede esta investigación, se presentará una revisión de estudios realizados a nivel nacional sobre las dinámicas o procesos de resistencia civil en diferentes lugares de Colombia y del departamento de Nariño, así como, estudios a nivel nacional sobre la dinámica del conflicto armado en el departamento y el municipio de Samaniego. Estos estudios ofrecen elementos importantes que permiten la contextualización en torno al objetivo general que se plantea y de igual forma permiten una aproximación a la problemática de la evolución de este fenómeno en el municipio de Samaniego.

Se iniciará con los estudios que abarcan el conflicto armado en Nariño y Samaniego; para lo cual se han tomado como referencia cinco textos en los cuales se trabaja el conflicto armado desde diferentes perspectivas. Masullo, Mouly y Garrido (2019) analizan el caso de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y los movimientos en Samaniego, que han buscado resistir pacíficamente a los actores armados en la región. Para su estudio, los autores realizaron entrevistas en profundidad a 80 informantes clave y complementaron esta información con observación directa durante visitas de campo en Samaniego. Por su parte, Lasso Urbano y Cabello-Tijerina (2022) buscaron comprender la forma en que se presenta el conflicto armado en el departamento de Nariño luego de cinco años de la firma final del Acuerdo de Paz a través de una metodología mixta; Mouly y Garrido (2018) emplearon un enfoque cualitativo orientado al estudio de caso, realizando entrevistas semiestructuradas, observación participante y revisión bibliográfica para examinar cómo los factores geográficos, sociales y políticos influyen en la aparición y desarrollo de las "zonas de paz". Por su parte, Jurado (2011) intenta alcanzar una comprensión más profunda del

fenómeno del desplazamiento forzado debido al conflicto armado en los departamentos de Putumayo y Nariño; y Hernández (2009) realiza una aproximación sobre la problemática del desplazamiento forzado en Nariño mediante una revisión bibliográfica.

En esa línea, el conflicto armado ha dejado una marca en el tejido social y político del país, impactando especialmente a las comunidades y sus territorios que han sido escenario de confrontaciones violentas y han dejado un gran número de afectados. Esta realidad se ha manifestado notablemente en el área del Pacífico colombiano (Choco, Valle, Cauca y Nariño), donde la presencia de diversos grupos armados ilegales, como las FARC, ELN y paramilitares, ha generado altos niveles de violencia y desplazamiento forzado, evidenciando más violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (Hernández, 2009).

En el sur de Colombia el conflicto armado presentó raíces estructurales que se encuentran en la pobreza y la falta de presencia estatal, sin embargo, en las últimas décadas, el conflicto se ha intensificado debido a las acciones de los diversos grupos armados presentes en la región, así como a la proliferación de cultivos, procesamiento y economía relacionada con la coca y la amapola y estrategias como el Plan Colombia. Para Hernández (2009) la intensificación se debe a tres factores: en primer lugar, el incremento significativo de la presencia de grupos insurgentes en el Departamento en los 80’s. Segundo, los alarmantes índices de analfabetismo, pobreza y carencias básicas en el Departamento; y finalmente, la irrupción violenta de las AUC o paramilitares (Jurado, 2011).

Para ambos autores la presencia de cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes han sido un elemento principal que ha marcado la dinámica del conflicto en Nariño. A partir del

año 2002, se fortalecieron los cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, como consecuencia de su desplazamiento desde Putumayo y Caquetá debido a las aspersiones aéreas implementadas por el Plan Patriota. Durante ese periodo, en Nariño, los cultivos de uso ilícito aumentaron en más de 7,000 hectáreas entre 2001 y 2002 y para 2011, se registraron cultivos de coca en 21 de los 64 municipios del departamento de Nariño, sumado a la producción de amapolas morfina y heroína en menor escala. A esto, se suma la comercialización de insumos químicos, el procesamiento de drogas, el tráfico de sustancias y el flujo migratorio de personas provenientes de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, quienes se involucran en organizaciones dedicadas a diversas actividades relacionadas con el narcotráfico, convirtiendo distintos puntos del departamento en centros clave para la negociación de estas actividades ilícitas entre ambos países (Jurado, 2011; Hernández, 2009).

En esa línea, Jurado (2011) y Hernández (2009) añaden que la presencia de grupos armados ha alterado el panorama de orden público en Nariño, junto con los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con Lasso Urbano y Cabello-Tijerina (2022) Nariño se distingue como uno de los departamentos con altos índices de violencia, aunque se presentó una disminución de esta posterior a la firma del acuerdo de paz. Lo anterior, debido a diversos factores que incluyen el incumplimiento de acuerdos, la falta de presencia integral del Estado en los territorios y la creciente expansión de estos grupos, así como la continua proliferación de cultivos ilícitos.

La presencia de actores armados en Nariño se intensificó a finales de los 80 y principios de los 90, desde 1995, las FARC y el ELN han mantenido una presencia significativa en la región, estableciendo sus operaciones en diversas áreas. Posteriormente, a

partir de 2005, grupos paramilitares comenzaron a operar en la región, generando tensiones y confrontaciones con los grupos insurgentes por el control de áreas estratégicas, como los cultivos ilícitos y las rutas de tráfico de armas y drogas. Además, en años más recientes, han surgido nuevos grupos paramilitares, como las Autodefensas Campesinas de Nueva Generación, Rastrojos y Mano Negra, que se han reorganizado tras la desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento. Esta proliferación de actores armados ha llevado a una compleja dinámica de conflicto, marcada por la disputa por el poder territorial y económico, especialmente en áreas donde se concentran los cultivos y el procesamiento de coca y amapola (Jurado, 2011; Hernández, 2009).

En el caso de Samaniego Mouly y Garrido (2018) mencionan que diferentes grupos armados, entre ellos las FARC, ELN, paramilitares y, más recientemente, grupos neoparamilitares, han tenido presencia activa en el municipio. Esto se debe al impacto del narcotráfico en la zona, cuyo valor estratégico como corredor hacia el Pacífico convierte el territorio en un punto clave para el tráfico ilícito hacia Estados Unidos. A lo largo de su historia, esta localidad ha sido marginada por el Gobierno central y ha experimentado los efectos adversos de políticas como la llamada seguridad democrática que durante su implementación dejó desatendidas las zonas periféricas, donde la presencia estatal era limitada o nula, como es el caso de Samaniego, lo que exacerbó el conflicto en esta área (Mouly et al, 2019). La deficiente infraestructura de transporte público, telecomunicaciones y servicios básicos reflejaron los altos niveles de pobreza en esta comunidad que contrastaban notablemente con otras regiones que comparten características geográficas y políticas similares en Colombia.

Así, al retomar los autores tratados se puede evidenciar que el conflicto armado en Nariño y Samaniego ha estado marcado por dos factores que han determinado su curso como lo es la presencia de diferentes actores armados y el cultivo y tráfico de ilícitos que sumados a la deficiente presencia del estado en los territorios han permitido la exacerbación del conflicto y han llevado a las comunidades a pesar en dinámicas que les permitan sobrevivir y resistir a la guerra sin necesidad de abandonar sus territorios, cultura, tradición entre otros.

De ese modo, continuando con el tema es pertinente retomar nueve textos que abordan las dinámicas o procesos de resistencia civil en Colombia y específicamente, en el municipio de Samaniego. Callejas y Sanín (2013) utilizan un enfoque cualitativo y realizan una observación en la comuna 13 para caracterizar y contextualizar acerca de los hechos de resistencia civil. Por su parte, Hernández (2009) recurre a la metodología de acción participante, que se centra en la interacción continua entre el investigador y las comunidades y Melo (2004) recurre a observación participante y análisis documental para analizar informes de derechos humanos, normativas constitucionales y registros históricos sobre la violencia y resistencia indígena en Colombia. Kaplan (2013), Hernández y Roa (2019), Masullo, Mouly y Garrido (2019) realizan entrevistas y revisión documental para examinar el rol de la ATCC en Colombia y su efecto sobre la violencia en la región y para para analizar la experiencia de resistencia civil de la ATCC y su relación con la construcción de paz respectivamente.

Además, Hernández (2006) recurre a la recopilación de testimonios directos y la observación de las prácticas de resistencia de las comunidades indígenas, como la “guardia indígena” y las asambleas permanentes, donde se analizan sus respuestas a las amenazas externas mediante prácticas comunitarias y de defensa cultural. Mouly, Idler y Garrido

(2015) realizan entrevistas semiestructuradas, observación participante y revisión bibliográfica para examinar cómo los factores geográficos, sociales y políticos influyen en la aparición y desarrollo de las "zonas de paz" (Hancock y Mitchell, 2007).

Así pues, es necesario mencionar que frente a las situaciones que se presentan o subyacen al conflicto armado, los civiles o no combatientes tienden a actuar de diferentes maneras para escapar de las lógicas de la violencia y sobrevivir. La resistencia es una forma de hacer frente a la guerra, es una lucha colectiva de construcción de paz y de defensa de la vida, la cultura y la autonomía. Se caracteriza por la negativa al uso de violencia y por un fuerte componente de organización comunitaria y acción colectiva que les permite resistir no solo a la violencia directa sino también a las imposiciones de políticas externas que amenazan las formas de vida particulares como en el caso de los pueblos indígenas. La resistencia se fundamenta en valores tradicionales y tiene varios componentes clave como el rechazo a la influencia de grupos armados y al abuso de poder; el fortalecimiento de formas de gobierno tradicional; y el desarrollo de estrategias de supervivencia en un contexto de conflicto que consideran ajeno (Melo (2004), Hernández (2006), (2009)).

La resistencia civil también es entendida como el uso de acciones no convencionales y no violentas por parte de civiles en contextos de conflictos asimétricos. En particular, esta forma de resistencia se centra en la no cooperación, donde los civiles, en lugar de apoyar a los grupos armados, optan por retirarse y organizarse de manera autónoma para proteger su comunidad. Según Masullo, Mouly y Garrido (2019) la resistencia civil es un "arma poderosa" para reequilibrar las asimetrías de poder en estos entornos, destacando su capacidad para deslegitimar a los adversarios y reducir la dependencia de la comunidad hacia

los actores armados, a través de acciones organizadas y deliberadas de no cooperación (pág. 141).

De ese modo, la resistencia civil en Colombia se convierte en una herramienta transformadora que emerge desde las bases sociales para enfrentar la violencia estructural y el conflicto armado, no obstante, también representa un riesgo, ya que los actores armados suelen reaccionar de forma violenta ante la neutralidad de las comunidades, poniendo en peligro a los líderes de estas iniciativas (Hernández, 2009).

Los civiles, por su parte, mediante la cohesión social y las organizaciones locales, pueden crear soluciones no violentas efectivas que protejan sus derechos y promuevan la paz incluso en entornos hostiles (Kaplan, 2013). En Colombia, existen varios ejemplos que permiten retratar lo anterior, según Melo (2004) las comunidades indígenas, bajo la amenaza de ser integradas en el conflicto, desarrollaron estrategias de resistencia civil que buscaban reducir la violencia y fortalecer sus propias estructuras sociales y políticas sin recurrir a la violencia. Estas comunidades se han declarado ajenas al conflicto armado y han inspirado a otros sectores de la sociedad. En el Cauca, la resistencia indígena se ha manifestado en prácticas como la "guardia indígena", la organización comunitaria y las asambleas permanentes, que son instrumentos de cohesión y defensa frente a las amenazas de violencia estructural y conflicto armado.

La guardia indígena, en particular, representa una práctica histórica de defensa pacífica que se complementa con formación en derechos humanos y resolución de conflictos .

Sin embargo, cabe anotar que la resistencia civil además de ser ejercida por indígenas también lo ha sido por los pueblos afrodescendientes y campesinos (Hernández (2006).

En tanto, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) surgió como respuesta de los habitantes de la región del río Carare a la violencia tanto de guerrillas como de paramilitares, ante la constante amenaza de ser estigmatizados o considerados colaboradores de algún grupo armado, los líderes locales decidieron adoptar una posición de neutralidad activa negociando un acuerdo con los diferentes actores armados para declarar que los civiles no tomarían partido en el conflicto y, sorprendentemente, estos actores aceptaron en gran medida la declaración de neutralidad, permitiendo a la comunidad actuar como un mediador en las disputas locales. Así pues, la ATCC desarrolló un proceso institucional para mediar en conflictos y amenazas de grupos armados, investigando acusaciones contra los civiles y logrando acuerdos que promovían la neutralidad en el conflicto. Estas estrategias permitieron a los civiles mantener una autonomía relativa y minimizar la violencia en su región, aunque también enfrentaron desafíos y riesgos continuos (Kaplan, 2013).

Para Hernández y Roa (2019) la experiencia de la ATCC es el ejemplo de que la resistencia civil es un acto defensivo y pragmático ejercido para enfrentar la violencia en el conflicto armado colombiano, puesto que, ellos, sin conocimientos previos de teorías sobre la no violencia, optaron por una resistencia pacífica para proteger sus vidas y preservar su territorio. La ATCC ejemplifica una resistencia que, aunque nació de una necesidad inmediata de autoprotección, fue evolucionando hacia una estrategia organizada y sostenida de paz. Para la ATCC, la resistencia civil no fue solo una postura pasiva; implicó acciones específicas como la organización comunitaria, la toma de decisiones estratégicas y la

negociación directa con actores armados para evitar el reclutamiento y preservar su autonomía. Este enfoque de resistencia les permitió establecer relaciones de respeto mutuo con grupos armados, garantizando así la seguridad y supervivencia de sus miembros sin recurrir a la violencia.

Ahora bien, la resistencia civil no se limita a prácticas pacíficas, ya que existen momentos en los que la comunidad se ve forzada a emplear diversos métodos, incluidos aquellos con armas, para defender sus derechos y autonomía frente a regímenes y estructuras de poder que los amenazan. Según Callejas y Sanín (2013) en la Comuna 13 de Medellín, se recurría al uso de armas para la defensa junto con marchas, protestas simbólicas, caminatas nocturnas, y actividades de recuperación de la memoria cultural y la paz, como fiestas comunitarias y campeonatos deportivos, las cuales representan tanto una respuesta a las injusticias vividas como una construcción de paz local por lo que la resistencia civil puede tener una relación con la desobediencia en el cual se desafía el poder que ejercen los grupos que operan en la zona. La resistencia civil se presenta como una extensión del concepto de sociedad civil y está profundamente ligada a la pluralidad y diversidad de esta ya que se asocia con acciones y conflictos que se desarrollan bajo una relación de defensa y oposición a regímenes autoritarios o dictatoriales que ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía (Melo,2004).

De acuerdo con Mouly, Idler y Garrido (2015) la resistencia civil es un componente esencial dentro de las "zonas de paz", se manifiesta a través de, por ejemplo, como en el caso de Samaniego mediante la utilización de símbolos como insignias naranjas en edificios civiles para señalar su compromiso con el derecho internacional humanitario y exigir a los actores armados que respeten estos espacios. De ese modo, las comunidades recurren a

utilizar tácticas de no cooperación frente a los grupos armados para proteger su autonomía y mejorar la seguridad comunitaria.

En este mismo municipio, la resistencia se estructuró en diferentes fases, destacando el periodo inicial (1997-2000), donde se organizaron acciones de no cooperación de manera informal, hasta su consolidación con el Pacto Local de Paz (2004-2007), que formalizó acuerdos entre la comunidad y algunos actores armados para reducir la violencia en la región.

Esto incluyó acciones como la petición de reconocimiento d el "sector de la montaña" como una reserva indígena, lo cual fortaleció su autonomía y seguridad frente a los actores armados. Así, ante la escasa presencia estatal, los residentes se adaptaron y aprendieron a coexistir con las guerrillas, desarrollando sus propias estrategias para fomentar el progreso local, administrar la justicia y garantizar la seguridad pública (Masullo, Mouly y Garrido (2019), Mouly y Garrido (2018)).

Desde entonces, a través de iniciativas comunitarias y la participación en proyectos de reconciliación, se demostró un compromiso continuo con la construcción de la paz que incluyo la promoción de diálogos intercomunitarios, la implementación de programas de desarrollo social y la defensa de los derechos humanos en colaboración con organizaciones locales e internacionales. Su perseverancia en esta lucha es un testimonio del poder del pueblo para resistir y superar los desafíos impuestos por el conflicto armado. De ese modo, la resistencia civil en Colombia supone ser una herramienta transformadora que emerge desde las bases sociales para enfrentar la violencia estructural y el conflicto armado y como un empoderamiento pacifista colectivo que impulsa cambios estructurales en la sociedad (Mouly et al, (2019), Hernández (2009)).

En esa línea, la resistencia civil constituye un mecanismo organizado y colectivo de empoderamiento de las comunidades a nivel político y social en contextos de conflicto armado o de opresión por parte de agentes que detentan el poder, asimismo, la resistencia es una herramienta que permite la transformación de una cultura violenta hacia una cultura de paz, siendo los procesos mencionados, pioneros o pequeños pasos hacia logros más grandes como el acuerdo de paz o los acuerdos en dialogo, sin embargo todavía quedan vacíos acerca de la experiencia de muchas comunidades después de este gran hito en pro de paz. Existe una notable falta de investigación empírica sobre las iniciativas de resistencia que se ejercen con la aparición de nuevos grupos, la escalada del narcotráfico y la migración entre otras problemáticas que podrían darle otra mirada a la resistencia civil en Colombia y en Samaniego.

Marco conceptual

En esa línea, en busca de una mayor comprensión de los aspectos fundamentales de esta investigación, se presentan los principales referentes conceptuales que se han incorporado para profundizar en el análisis de la guerra civil en Colombia y su impacto en las comunidades rurales. Así, resulta relevante abordar las distintas posturas teóricas que han surgido en torno a conceptos como la guerra civil, la resistencia civil, los movimientos de resistencia y las comunidades de paz. Estos conceptos se inscriben en el campo de los estudios de conflicto y paz, abarcando una problemática central en esta investigación.

Para este caso, nos apoyaremos en los aportes de diversos autores, entre ellos Kalyvas (2006), Kaplan (2013), Hancock y Mitchell (2007), y Masullo (2017). El marco conceptual se estructurará abordando primero el concepto de guerra civil, que constituye el contexto inicial de esta discusión y donde aparece la resistencia civil. A continuación, exploraremos el concepto de resistencia civil, que se manifiesta en las prácticas de rechazo a la cooperación con actores armados. Posteriormente, nos enfocaremos en los movimientos de resistencia civil, con sus diferentes modalidades de no cooperación, lo cual nos llevará al concepto de comunidades de paz. Estas comunidades buscan la neutralidad y la autonomía en medio del conflicto, constituyéndose en espacios seguros y de cohesión social.

Con esta estructura, se pretende articular una comprensión más profunda de cómo los conceptos de resistencia y autonomía se interrelacionan en el contexto de Samaniego, Nariño, donde las comunidades han utilizado estos mecanismos para enfrentar la violencia y construir alternativas de convivencia pacífica.

La **guerra civil** en un conflicto en el que diversos grupos luchan por el control del territorio y los recursos, Peter Wallensteen en los años noventa empezó a utilizar el término para referirse a toda confrontación armada dentro de un Estado que produce al menos mil muertes por año. En dicha confrontación pueden participar actores estatales como las fuerzas armadas, y no estatales como los grupos guerrilleros; sin embargo lo anterior, responderá al tipo de guerra civil que se desarrolle, ya que se encuentran las guerras étnicas, separatistas, religiosas, de guerrillas, o revoluciones las cuales implican dinámicas y motivos que varían unos a otros dependiendo del contexto, el lugar y la situación por lo cual siempre se estaría hablando de manifestaciones particulares de un mismo fenómeno general (Nasi, Ramírez y Lair 2003).

La guerra civil puede ser causa de compleja interacción de factores políticos, económicos, sociales y culturales, para autores como Fearon, Kasara y Laitin (2007) las guerras civiles se originan por la debilidad diferenciada del Estado, se podría decir que el aparato estatal no cuenta con la capacidad para suplir las necesidades a nivel económico, político y social en las periferias al igual que lo hace en las zonas céntricas, lo que da espacio a otros grupos a cubrir esas falencias o debilidades, suplir las carencias y tomando su lugar en aquellas zonas en las que no hace presencia el Estado por su incapacidad. En cambio, para autores como Gurr (1978) estas se originan en las percepciones de desigualdad o desventaja de un grupo respecto al acceso al poder político, riqueza u otros beneficios que otro grupo en la misma zona detenta generando sentimientos de injusticia y resentimiento, los cuales puede llevar a tensiones sociales, ya que el grupo menos favorecido podría sentir que sus necesidades no son atendidas y que existen barreras para acceder a los mismos recursos o derechos.

No obstante, la guerra civil no siempre obedece a causas objetivas como las anteriores, sino también a causas subjetivas que corresponden a la percepción de los agentes y la construcción del discurso como las guerras por motivos étnicos o religiosos. Para Kaldor (2013) la etnia es solo un instrumento; en realidad, la guerra surge de la destrucción o fragmentación del Estado-nación ya que, la tendencia ha sido exacerbar e instrumentalizar lo étnico con el propósito de imponer dominación en territorios donde el Estado no tiene presencia.

Las guerras han sido clasificadas de diferentes formas, por sus causas o motivos principales como las guerras ideológicas o étnicas; por su nivel de intensidad; por el grado de injerencia internacional; por duración; por tipos de grupos enfrentados; o por los objetivos de los grupos en el conflicto. Sin embargo, Kalyvas (2009) hace una propuesta diferente para clasificar las guerras y establece que las guerras se pueden clasificar a partir de su tecnología de combate.

En esa línea, la tecnología de combate se refiere a las formas mediante las cuales se desarrollan los enfrentamientos en términos de procedimientos e instrumentos, de ese modo, las guerras civiles se clasifican en convencional y no convencional; simétrico y asimétrico. Un combate convencional ocurre en campos de batalla específicos y bien delimitados, con líneas de batalla claras y fuerzas regulares. Por otro lado, el combate no convencional carece de una o más de estas características, presentando un enfoque menos estructurado. En cuanto a la simetría, un enfrentamiento simétrico implica que los bandos en conflicto tienen capacidades similares y emplean estrategias semejantes, lo cual les permite igualar su capacidad material. En cambio, un combate asimétrico se caracteriza por las diferencias en estrategias entre los bandos enfrentados.

La tecnología de combate puede combinar la convencionalidad y la simetría dándole características a cada guerra o disputa. Por ejemplo, las guerras asimétricas no convencionales se caracterizan por ser conflictos irregulares en los que predominan las tácticas de guerrilla y contra insurgencia, estos enfrentamientos suelen darse en áreas periféricas y buscan extenderse hacia el centro. En el caso de Colombia, durante el periodo conocido como "La Violencia" y en conflictos posteriores, la lucha se desarrolló entre grupos insurgentes y fuerzas del Estado, en un contexto donde no existen campos de batalla definidos ni líneas de frente claras (2009).

En este tipo de conflicto los civiles no son solo espectadores ni víctimas pasivas; sus acciones pueden inclinar la balanza del poder en sus comunidades, ya sea mediante la colaboración con ciertos grupos armados o a través de la resistencia activa o pasiva a las imposiciones externas (Kalyvas, 2006).

En este sentido, l**a resistencia civil** debe entenderse como una forma de acción de las comunidades, ya sean o no víctimas en una guerra civil o, de manera específica, en el conflicto armado. La resistencia civil es una forma de acción política y social en la que grupos o comunidades rechazan de manera pacífica y organizada las decisiones, acciones y cooperación con los actores armados, así como, ciertas políticas, decisiones, o gobiernos con el fin de defender derechos, valores o su autonomía en su territorio.

De este modo, el Estado, los grupos armados y las multinacionales pueden ser antagonistas de la resistencia y, por lo tanto, no pueden organizarla ni ejercerla, ya que esta, como se mencionó, estará dirigida en su contra. La resistencia se convierte en una oposición de fuerzas, donde el poder de multinacionales, el Estado y grupos armados se enfrenta al contrapoder de la sociedad civil y las comunidades étnicas que buscan contrarrestar las

dinámicas y procesos de sus adversarios. De acuerdo con el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario la intromisión de actores externos en los territorios es una razón por las que las comunidades deciden resistirse (Medina, 2021).

La resistencia rechaza la violencia como forma de lucha ya que, esta puede generar represiones y representar peligros para las comunidades, así como, socavar la legitimidad de los procesos, sin embargo, no es ajena a su uso en casos específicos dependiendo del contexto por parte de las comunidades. Por lo tanto, la resistencia civil se caracteriza por el uso de la no violencia, en ese sentido la mayoría de sus acciones suelen incluir manifestaciones, desobediencia civil, boicots, huelgas, intervenciones artísticas y otros métodos de protesta pacífica. En ese orden, según Caicedo (2021) la resistencia puede manifestarse tanto en la cotidianidad como activamente; la primera hace referencia a esas múltiples prácticas que los individuos realizan diariamente y que sustentan su ejercicio de resistencia, pero qué son indetectables y requieren poca o ninguna coordinación o planificación a diferencia de la resistencia activa.

No debe confundirse la no violencia o la resistencia pacífica con pasividad, inacción o debilidad; la no violencia hace referencia a acciones activas orientada a denunciar las atrocidades de la guerra y movilizar a quienes buscan alternativas pacíficas para resolver conflictos (López, 1997).

La no violencia es ejercida por grupos o comunidades en los que el poder y la toma de decisiones están distribuidos entre varios integrantes o grupos. En este tipo de organizaciones, es común encontrar concejos de ciudadanos (grupos de personas que se reúnen para discutir y tomar decisiones colectivas) u otras organizaciones sociales. Estas entidades son las que dirigen y lideran diferentes tipos de procesos en el ámbito local, como

en barrios o comunidades, y abarcan temas sociales, políticos, culturales y ambientales. La descentralización y participación ciudadana que caracterizan estas organizaciones buscan promover la igualdad y la inclusión en las decisiones, fortaleciendo la cohesión comunitaria sin recurrir a la violencia (Martinez Bernal, 2016).

La resistencia surge a partir de la identidad de los grupos “sin poder", para estos, la resistencia civil representa una postura de enfrentamiento pacífico que se basa en valores de unidad y solidaridad que deben ser aprendidos y fortalecidos en el proceso. Según Osorio (2001) la resistencia se caracteriza por: (1) la afirmación de la identidad de quienes resisten, es decir el reconocimiento de las personas involucradas sobre su dignidad y sus derechos; (2) la no cooperación colectiva; y (3) la búsqueda de apoyo de terceras fuerzas que respalden sus objetivos.

La resistencia civil es el primer paso en la construcción de movimientos que buscan establecer autonomía frente a la represión del Estado, de grupos ilegales y de multinacionales. En esta línea, Martínez (2016) sugiere que esta resistencia implica una negativa a obedecer y una oposición a la lealtad hacia el Estado, constituyendo esencialmente un rechazo a cualquier forma de dominación.

De ese modo, es pertinente abordar lo que se conoce como **movimientos de resistencia civil;** estos, hacer referencia a los movimientos colectivos de la población que se organizan con el fin de responder al conflicto armado, pero no formando parte de un bando o de la contienda. Los movimientos no buscan tener un enfrentamiento directo con el enemigo, sino poner en marcha un sistema de resistencia no violenta a través del cual las comunidades puedan seguir creciendo y desarrollando sus actividades cotidianas en un entorno en el que no se ven expuestos o en peligro. Agrega Masullo (2017) que para

dictaminar la no cooperación civil se han creado diferentes categorías como (1) la no-cooperación pactada, donde la comunidad negocia con los actores armados; (2) la no-cooperación unilateral, en la cual, no se negocia, se resiste; y, por último, (3) se encuentra la no-cooperación oblicua, donde se resiste de manera encubierta. Los movimientos de resistencia son formas de acción colectiva, es decir movimientos en los que un grupo de personas, organizaciones o comunidades realizan diferentes actividades con el fin de alcanzar objetivos compartidos, resolver problemas comunes o expresar intereses colectivos.

Las experiencias de resistencia civil se basan en la organización comunitaria para impedir la presencia de actores armados en sus territorios. Estas iniciativas han construido redes de apoyo comunitario con un enfoque en la cohesión social. De este modo, la resistencia civil no solo actúa como una herramienta de "guerra no violenta", sino que también fortalece el tejido social y fomenta la solidaridad entre sus miembros, quienes encuentran en la lucha una causa colectiva que se convierte en un bien público compartido.

Mouly, Idler, y Garrido (2015) mencionan que las comunidades de paz son representaciones de cómo la resistencia civil puede convertirse en una herramienta eficaz para proteger la vida, mantener la dignidad y construir alternativas de paz en medio de la guerra. En ese orden, finalmente es necesario abordar este concepto; **las comunidades de paz** son grupos de personas, generalmente en contextos rurales, que deciden organizarse para resistir de forma no violenta a los efectos de conflictos armados rechazando la participación en cualquier acto violento y declarándose neutrales.

Las comunidades de paz se han generado como resultado del desarrollo de los movimientos de resistencia civil en entornos de conflicto, estos territorios no solo buscan proteger a sus habitantes también desean garantizar una paz sostenible evitando asociarse

con actores armados que no apoyan. Hancock y Mitchell (2007) señalan que las llamadas zonas de paz son estas donde las comunidades declaran formalmente neutralidad y de esta forma protegerse a sí mismas y a sus recursos, trazado límites, estableciendo reglas que ayuden a que los actores armados no ingresen, salgan del territorio y se evite de esta forma que realicen actos de violencia en contra de la comunidad.

En el escenario colombiano las comunidades de paz se han convertido en modelos de construcción de paz local que posibilitan las comunidades la construcción de escenarios de convivencia pacífica en el marco del conflicto. La misma está fuertemente relacionada con la descentralización y la independencia porque las comunidades desarrolladoras de zonas de paz no solo tratan de evitar el uso de violencia directa sino también se esfuerzan para constituir sistemas de gobierno propios y efectivos que promuevan la justicia y la protección y respeto a los derechos humanos.

Las comunidades de paz se han implementado en términos de acuerdos internos que apuntan a marginar a los actores armados en la vida diaria de las personas para que estas puedan vivir y trabajar de manera segura, aunque haya una guerra. Estas comunidades tienen una estructura de implementación orientada a la toma de decisiones que les permite a los habitantes sentirse parte del proceso, lo que conlleva a una mayor responsabilidad.

Así, en este marco, el concepto de guerra civil se convierte en un contexto condicionante para el surgimiento y desarrollo de la resistencia civil, los movimientos de resistencia y las comunidades de paz. El conflicto en Colombia ha tenido actores armados distintos al Estado y las dinámicas de la guerra han generado en las regiones campesinas un tipo de organización que quiere defenderse y ser autónoma en algunos municipios del país. Según Arjona (2017) el conflicto produce un equilibrio entre los grupos armados que buscan

ejercer dominio tanto del espacio geográfico como de las personas, dejando a las comunidades en un dilema de colaboración, resistencia o éxodo. El corte de la relación civil con el estado y la formación de comunidades de paz son la respuesta a este contexto de guerra civil donde los ciudadanos se niegan a tomar partido y en su lugar forman un espacio seguro para los civiles.

Por lo tanto, el marco conceptual de esta investigación se basa en las conexiones entre guerra civil y las tácticas de la resistencia civil que las comunidades han utilizado en la lucha contra el conflicto armado. Las comunidades de paz, los movimientos de resistencia y la resistencia civil no son solo formas de sobrevivir, sino expresiones del potencial de las comunidades en contextos profundamente afectados. Estos esfuerzos desactivan la influencia armada de los actores y destacan la organización civil como un recurso clave para construir la paz.

Metodología

El presente trabajo se enmarcó en una investigación de tipo cualitativo y busco identificar los cambios en los procesos de resistencia civil en el marco del conflicto armado en Samaniego, Nariño posterior a la firma del acuerdo de Paz con las FARC. Para ello, se consideraron los tres objetivos específicos planteados, en torno a los cuales se definieron los métodos de recolección y análisis de datos.

La investigación cualitativa está orientada a la producción de datos descriptivos por eso busca comprender los significados, definiciones y conceptos asociados a la resistencia civil en el municipio de Samaniego, tal como se presentan en las experiencias y narrativas recolectadas mediante entrevistas semiestructuradas. Este enfoque permite explorar el problema social desde la perspectiva de los actores involucrados, partiendo del supuesto de que la realidad social se construye a partir de significados compartidos (Salgado, 2007; Urbina, 2020). En este contexto, la investigación cualitativa ofrece a la investigadora herramientas para comprender de manera más profunda la realidad local, adquirir nuevos conocimientos y descubrir diversas perspectivas sobre las dinámicas de resistencia en Samaniego.

Unidad de análisis

Como ya se expuso anteriormente, la unidad de análisis de esta investigación fue el municipio de Samaniego, ubicado en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Este situado en una región montañosa de la cordillera occidental cuenta con una población predominantemente rural y su economía se basa principalmente en la agricultura, aunque también, se realizan actividades como la ganadería y la minería artesanal. Además,

Samaniego se ha visto afectado por la presencia de actores armados ilegales en el marco del conflicto armado, quienes han disputado el control del territorio debido a su importancia estratégica para actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. Estas condiciones han generado desplazamientos forzados, amenazas y vulneraciones a los derechos humanos.

Diseño de la investigación

El trabajo fue de tipo cualitativo, y para comprender los procesos de resistencia civil y sus cambios a lo largo del tiempo, se recurrió al análisis de caso específico, empleando un enfoque retrospectivo y prospectivo con una perspectiva longitudinal que abarca el periodo comprendido entre 1997 y 2020, este tipo de diseño permite examinar cómo el conflicto armado, la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC han afectado las dinámicas de resistencia civil en la región. Un enfoque retrospectivo implica la posibilidad de repasar todo un proceso descriptivamente y analizar lo que eso significa para el presente un enfoque de prospección implica la contemplación de cómo esos procesos han seguido desarrollándose hasta el presente y cómo pueden cambiar en el futuro (Baena, 2015).

Un estudio de caso retrospectivo, en particular, se basa en la recolección y análisis de datos sobre fenómenos pasados. En este caso, los eventos y procesos asociados con la resistencia civil en Samaniego antes de la firma del acuerdo de paz se examinan con el fin de entender las estrategias y tácticas empleadas por las comunidades locales en la búsqueda de una coexistencia pacífica. Los datos se obtendrán a partir de documentos oficiales, informes y registros sobre el conflicto en la región, junto con entrevistas a personas clave que fueron o siguen siendo testigos de los eventos. A su vez, un análisis prospectivo permite realizar un seguimiento de las prácticas de resistencia actuales y observar cómo estas se transforman en

respuesta a los cambios en el entorno, tales como la retirada de las FARC y la posible aparición de nuevos actores armados.

Recolección de la información

Para la recolección de la información la investigadora realizó entrevistas semiestructuradas, el cuestionario (ver anexo 1) costaba de 29 preguntas; las tres primeras referente a aspectos generales y las restantes se dividieron de acuerdo con los dos objetivos planteados en el trabajo y a su vez, por 5 diferentes temáticas las cuales fueron: Antecedentes; Caracterización del proceso de resistencia civil antes del acuerdo de paz; Caracterización posterior al acuerdo de paz; Comparación antes y después del acuerdo de paz; e Impacto y perspectivas futuras.

La investigadora escogió una muestra de cuatro personas (ver tabla 1) que tienen conocimientos relevantes y experiencias directas o indirectas en el proceso de resistencia civil en Samaniego. A través de estas entrevistas el estudio tiene como fin encontrar testimonios relevantes que contribuyan con una percepción compleja y detallada sobre los eventos y procesos por los cuales se ha caracterizado las dinámicas de resistencia en la región, desde el agravamiento del conflicto armado hasta las consecuencias del proceso de paz.

Tabla 1

Descripción de los participantes.

Participante	Edad	Tipo de participación durante el conflicto
Participante 1	94 años (exalcalde)	Directo
Participante 2	56 años (alcalde actual)	Directo
Participante 3	60 años (fiscalía)	Directo
Participante 4	47(secretario de gobierno)	Directo

Procedimiento

La investigación tuvo tres fases:

Fase 1: Se realizó una revisión de la literatura en cuanto a referentes teóricos e investigaciones previas realizadas alrededor de la temática a nivel nacional y regional por medio de bases de datos y repositorios universitarios, tanto en español como en otros idiomas. Con base en esta revisión se delimitaron las preguntas del cuestionario para la entrevista semiestructurada y el tipo y diseño de la investigación.

Fase 2: Se realizó las entrevistas mediante la plataforma meet y de manera presencial dependiendo del entrevistado, se procedió a grabar la sesión con el consentimiento del participante y posteriormente los resultados se trascribieron en un documento de Word.

Fase 3: Se procedió con la escritura de los resultados a partir de la información encontrada en la búsqueda bibliográfica y en la transcripción de las entrevistas. La discusión se enfocó en mostrar cómo los hallazgos del estudio soportan, contradicen o amplían las teorías previamente revisadas, generando conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones sobre resistencia civil en el país, el departamento de Nariño y el municipio de Samaniego.

Consideraciones éticas

La realización de esta investigación en el municipio de Samaniego, Nariño, requirió un enfoque ético riguroso debido a la naturaleza sensible del tema y las implicaciones que podría tener tanto para los participantes como para mí como investigadora. Desde el inicio, comprendí que trabajar con un territorio inmerso en dinámicas de conflicto armado y violencia traía riesgos para ambos lados.

Uno de los primeros desafíos éticos que enfrenté fue obtener el consentimiento informado de los participantes el cual, fue presentado de manera impresa, tal como se muestra en los anexos del trabajo (ver anexo 2). Sin embargo, varios entrevistados, especialmente aquellos de mayor edad, expresaron temor respecto a las consecuencias de brindar su testimonio. Algunos llegaron incluso a cancelar las entrevistas, ya que pensaban que sus relatos podrían hacerse públicos en medios de comunicación como la televisión. Este miedo reflejaba la percepción de riesgo asociada a hablar sobre temas relacionados con el conflicto

armado y los actores involucrados, un aspecto que Lee (1993) identifica como la amenaza de sanción y la amenaza política que enfrentan quienes abordan temas sensibles.

Ante esta situación, decidí replantear la forma en que planteaba las entrevistas, en lugar de presentarlas como un formato estructurado, opté por describirlas como una conversación informal, una charla en la que buscaba escuchar sus historias. Este cambio fue crucial para reducir el temor de los entrevistados y generar un ambiente de confianza. La estrategia no solo permitió recopilar información valiosa, sino que también respetó las inquietudes y límites de los participantes.

En cuanto al desplazamiento hacia Samaniego, me encontré con diversas limitaciones importantes, como el tiempo disponible, los recursos económicos y el temor inherente a visitar un lugar desconocido con antecedentes de violencia. Estos factores dificultaron la realización de las entrevistas de forma presencial. Aunque el contacto directo hubiera permitido profundizar más en las dinámicas locales, prioricé la seguridad de los entrevistados y mi propia integridad, por lo que recurrí a entrevistas virtuales siempre que fue posible.

Desde el inicio de la preparación de mi trabajo de grado, tenía claro que quería desarrollar una investigación sobre mi tierra, visibilizando conflictos que a menudo no reciben la atención necesaria. Como nariñense, conozco de primera mano el abandono estatal que afecta a nuestra región, que es vista como una periferia lejana, pero que también representa una conexión vital con el mundo por su ubicación estratégica. Este doble carácter ha hecho de Nariño un territorio históricamente disputado por múltiples actores armados.

Elegí Samaniego como objeto de estudio porque sentí una conexión especial con la forma en que su comunidad, después de años de violencia y dolor, ha demostrado una

capacidad única para resistir y apostar por la paz. Este interés se vio influido por mi formación como politóloga, pues siempre he considerado que la política tiene el poder tanto de dividir como de unir a las sociedades. En el caso de Samaniego, el conflicto armado y las dinámicas de poder político han jugado un papel determinante en las problemáticas que afectan al municipio, y entendí que mi investigación podría contribuir a dar voz a estas historias de resistencia que suelen pasar desapercibidas.

Otro aspecto ético importante fue mi reflexión constante sobre mi posición como investigadora y el manejo de mis propios sesgos. Guber (2011) señala que la reflexividad implica que el investigador sea consciente de los contextos sociales y políticos que lo condicionan. En mi caso, como mujer joven nacida en Nariño, mi conexión con el territorio influyó profundamente en mi forma de aproximarme al tema. Mi contexto personal, como parte de una región históricamente marginada y afectada por el conflicto armado, motivó mi interés por visibilizar historias locales.

Además, era consciente de que la seguridad de los entrevistados debía ser una prioridad, dado que todos ellos desempeñaron roles clave en diferentes momentos del conflicto y vivieron sus consecuencias de manera directa. Como es bien sabido en nuestro contexto, quienes expresan sus opiniones o comparten información sobre estos temas corren el riesgo de ser silenciados. Por esta razón, el consentimiento informado fue una herramienta fundamental, no solo para respetar los derechos de los participantes, sino también para garantizar la confidencialidad y el manejo ético de la información que me confiaron.

Lee (1993) subraya la importancia de desarrollar estrategias para minimizar los riesgos en investigaciones sobre temas sensibles, y considero que las decisiones tomadas

durante mi trabajo reflejan este principio. A pesar de las dificultades, logré generar un espacio seguro para que los participantes pudieran compartir sus experiencias, y cada paso estuvo guiado por un compromiso ético firme.

En conclusión, esta investigación no solo abordó un tema complejo y sensible, sino que también exigió un compromiso constante con la protección de los participantes y la reflexión ética en cada etapa del proceso. Mi enfoque siempre estuvo orientado a garantizar que el trabajo final reflejara la realidad de Samaniego de manera respetuosa, responsable y auténtica.

Capítulo I

Antecedes del proceso de resistencia civil en Samaniego

Samaniego está ubicado a 117 km al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto; al norte limita con el municipio la Llanada; con Linares y Ancuya al Oriente; al sur con Guatarilla, Santacruz, Providencia y Tuquerres; y con Ricaurte y Barbacoas al occidente. Samaniego cuenta con un extenso sector montañoso, tienen variedad de pisos térmicos y su economía se basa en la agricultura; los ríos Cristal, Pascual, San Juan, Pali, Saspi y Telembí bañan al territorio organizado en 24 corregimientos, 86 veredas, un resguardo indígena y un cabildo. Samaniego, ha sido históricamente un escenario de conflicto armado y violencia, pero también ha demostrado una destacada capacidad de organización y resistencia pacífica, en ese sentido, ha atravesado diversas etapas de conflicto, así como ciclos de construcción de paz impulsados por la población civil, las administraciones locales y el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.

A continuación, se narrarán los antecedentes de estos procesos, organizados cronológicamente, para evidenciar el esfuerzo colectivo en la defensa de los derechos y la paz en la región.

Inicio del conflicto armado en Samaniego

Desde los años 80, Samaniego comenzó a experimentar una serie de problemáticas sociales, económicas y políticas que fueron exacerbadas por la presencia de cultivos ilícitos y la llegada de actores armados ilegales. En 1989, se establecieron en el municipio grupos armados como el Frente 29 y la Compañía Mariscal Sucre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de los Comuneros del Sur y la Compañía

Guerreros del Sindagua del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entrada de estos grupos trajo consigo una ola de violencia que incluyó violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y la colocación de minas antipersona en varias zonas del municipio, especialmente en el sector montañoso. Esta situación de violencia generó un rechazo generalizado en la sociedad, que empezaba a organizarse en búsqueda de paz y justicia.

En 1996, niños de Samaniego participaron en una movilización nacional conocida como el Mandato Infantil por la Paz, en la que alrededor de tres millones de niños de todo el país votaron en favor de la paz, pidiendo a los adultos y a los actores armados el cese de la violencia. Con esta marcha los niños demostraron que eran conscientes sobre la violencia del territorio y que deseaban la paz, este acto inspiro a que, en el año siguiente, 1997, se realizara el Mandato Ciudadano por la Paz donde fueron los adultos quienes ahora, expresaban su deseo de darle fin al conflicto armado. Fueron estas movilizaciones las que iniciaron una serie de esfuerzos por parte de la comunidad para construir un territorio de paz.

22-11-1997 | B125, B112 | SAMANIEGO / NARIÑO | EL TIEMPO | 7A

Más de 2.000 habitantes marcharon ayer

Samaniego le exigió respeto a la guerrilla

Samaniego (Nariño)

Con banderas del país en distintos formatos y pañuelos blancos, más de 2.000 habitantes de Samaniego, población del sur de Nariño, decidieron romper con 16 años en los que la guerrilla ha impuesto su soberanía.

Primero, pese a la prohibición de la guerrilla de no realizar elecciones en el municipio y obligar a los candidatos a abandonar y renunciar, el pasado 26 de octubre más de 4.000 personas decidieron salir a votar.

Ayer, centenares de personas se concentraron y marcharon por las calles principales de la localidad para decirle a la guerrilla que respete el resultado electoral del 26 de octubre, que dio como ganador a Manuel Cuéllar, del movimiento Nuevo Samaniego.

Poco después del mediodía, los pobladores empezaron a congregarse en el parque Sol Andino y en una acción sin precedentes en esta zona de influencia subversiva, marcharon en rechazo a 16 años de hostigamiento del Frente Comunero del Sur del Eln, del 29 frente de las Farc y de un reducto del Epl, que operan en la zona.

Desde antes de elecciones, el Eln secuestró al ahora alcalde electo de Samaniego y a otros 47 candidatos a concejos y alcaldías de nueve municipios del sur de Nariño y los liberó luego de que firmaran un documento en el que renunciaban a sus aspiraciones electorales.

No obstante lo anterior y ante los anuncios en el sentido de que las renuncias no tendrán efecto, el 26 de octubre, pese a las amenazas, las gentes decidieron salir a votar. Manuel Cuéllar logró el mayor número, con 2.300 votos a su favor. Otros dos candidatos sumaron unos 1.000 votos.

Al día siguiente, el Eln promulgó un comunicado en el que desconocía los resultados y pedía la renuncia inmediata de Manuel Cuéllar y de los concejales electos y pedía definir fechas para nuevas elecciones "con participación libre y democrática de todos".

Desde ese mismo instante empezó a gestarse la marcha que se realizó ayer, partiendo desde el polideportivo ubicado a la salida hacia Pasto hasta el parque principal de Samaniego donde se realizó una gran concentración.

"Estamos ejerciendo el principio de la soberanía popular y haciendo uso del derecho universal de libre expresión. Por eso exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas" dijo Héctor Bastidas Ibarra, uno de los 10 concejales electos por el movimiento Actitud Renovadora.

El electo alcalde Manuel Cuéllar asistió en Cartagena a un encuentro de nuevos alcaldes.

Jesús Ramiro Melo, actual alcalde, tampoco se encontraba pues viajó previamente a una reunión a actividades oficiales. El reemplazo a Óscar Pantoja a quien la guerrilla secuestró y obligó a renunciar por presuntos malos manejos en el cargo.

Pese también hay quienes expresan sus dudas de que las amenazas provengan de la guerrilla. "Aquí la situación de orden público es irregular. No sabemos cuál es la guerrilla ni cuál el Ejército. Todos tienen los mismos uniformes y las mismas armas. No hay cómo saber quiénes son unos y quiénes son los otros" advierte un funcionario municipal quien pide que se omita su nombre.

Simultáneamente a lo anterior, William Ortega, gerente de la emisora Samaniego Estéreo FM., denunció amenazas y presiones de la guerrilla por no dar a conocer sus comunicados.

En la última llamada que le hicieron para que pase los comunicados, Montenegro respondió que si lo hacía "sería como ser cómplice de ellos y la conquista que me dieron en que Samaniego se iba a quedar sin emisora, colgaron y no han vuelto a llamar".

Ilustración 1. *Tomado de *El Espectador* (1997). Disponible en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. https://www.javerianacali.edu.co/biblioteca/recursos-digitales*

En 1998, el municipio de Samaniego también formó parte del proyecto “100 Municipios de Paz” de REDEPAZ, financiado por la Unión Europea, el cual, permitió a los habitantes compartir experiencias con otros municipios que ya habían iniciado iniciativas similares, generando un intercambio de estrategias para afrontar la violencia de manera no violenta. Bajo la administración del alcalde Manuel Cuéllar y con los antecedentes de los proyectos mencionados Samaniego fue declarado oficialmente como "Territorio de Paz" en el marco del Mandato Nacional y Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Este nombramiento representó un compromiso público de la comunidad de trabajar por la paz en el territorio. Ese mismo año, la Ley 434 estableció el Consejo Nacional de Paz a nivel nacional, una instancia que buscaba fortalecer la conciencia sobre el conflicto y promover

acciones para mitigar sus efectos. En Samaniego, esta ley sirvió de base para la creación de un Consejo Municipal de Paz, que se convirtió en una plataforma importante para la resistencia pacífica y la defensa de los derechos de la población civil.

23-01-1998 | B112 | SAMANIEGO / NARIÑO | EL ESPECTADOR | 7A

Samaniego cambiará su historia

El municipio nariñense será el quinto territorio del país en ser declarado como de paz

MAURO SALCEDO
Pasto

El adagio popular reza que no hay mal que por bien no venga. Quizás Samaniego, un municipio enclavado en las montañas nariñenses, no hubiera querido dejar la estela de sangre que la historia quiso conferirle desde las épocas del bipartidismo, y ahora con las temas guerrilleras, para comenzar a partir de hoy a olvidar su tragedia cuando sea declarado territorio de paz.

De unos 8.000 habitantes, Samaniego está localizado a 110 kilómetros al occidente de Pasto, en las estribaciones de la cordillera occidental, donde el XXIX frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el de Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (Eln), escalaron un no rotundo a la violencia y la intolerancia en la que existen.

Samaniego ha sido objeto de por lo menos 12 tomas guerrilleras en los últimos 10 años.

En este tiempo de guerra entre liberales y conservadores, este territorio del sur del país fue uno de los más conflictivos y, según los historiadores, estuvo dominado durante muchos años por clérigos que llegaron a refugiarse allí, después de ser expulsados de Ecuador durante el primer mandato del radicalismo liberal del general Eloy Alfaro.

El 25 de julio de 1994, el Eln asesinó al alcalde de Samaniego, Luis Alejandro Bastidas, un mayor retirado del Ejército, de quien se dijo "no supo mantener el equilibrio de su administración dentro de las exigencias que los dos bandos insurgentes (Farc y Eln) siempre hicieron contra él.

A las 11 de la mañana de hoy, en plena plaza principal, será lanzado el manifiesto por medio del cual Samaniego se convierte en el quinto territorio de paz, como quiera que hicieron lo mismo Aguachica (Cesar), La Hormeta (Cundinamarca), San José de Apartadó (Chocó) y Puerto Wilches (Santander).

Las calles de la población, otrora lugar de tránsito de los insurgentes, serán hoy un mar de gigantes de banderas blancas y verdes, que contrastarán con los cientos de sombreros de rosas rojas colocados en las puertas de las casas del poblado.

MAURO SALCEDO
Este es el parque principal de Samaniego (Nariño), donde hoy miles de habitantes se reunirán para proclamar que quieren la paz y la vida

Ilustración 2. *Tomado de *El Espectador* (1998). Disponible en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.* https://www.javerianacali.edu.co/biblioteca/recursos-digitales

Samaniego ha presenciado asesinatos de alcaldes, secuestros y un involucramiento cada vez mayor de actores armados que han llevado al país a un aumento importante en los homicidios. Durante la década de los noventa, la presencia de las FARC y el ELN en el municipio incrementó significativamente la violencia: el número de homicidios reportados aumentó de 172 en 1988 a 853 en 1998 el control territorial fue la marca por la cual tanto un grupo como el otro querían impregnar la región.

Los años finales de esa década y comienzos de los años 2000 se caracterizaron por la llegada de los paramilitares, y con ellos un nuevo ciclo de violencia mucho mayor y masivo. En el año 1999 los integrantes del bloque llamado Libertadores del Sur, Fracción de las Autodefensas Unidas de Colombia procedieron a conquistar Samaniego, la llegada de los paramilitares elevó la tasa de homicidios a 1.669 homicidios en el año 2000 y 3.445 en 2002, como se puede observar en la ilustracion 3. La estrategia paramilitar implicó uso de violencia selectiva, masacres, desplazamiento forzado en un esfuerzo por erradicar cualquier apoyo a los grupos guerrilleros y reafirmar control sobre el espacio.

Esta dinámica de violencia ejercida por los paramilitares incidió en la dinámica de vida del pueblo, sobre todo al interior de la zona montañosa, donde el desplazamiento y las minas antipersona instruyeron un clima de cárcel y miedo. A pesar de las circunstancias adversas los habitantes supieron mostrar un notable poder para sobrellevar la situación. Hubo iniciativas impulsadas por organizaciones locales que se propusieron mantener una relación mínima con actores armados y defender a la población civil mediante mecanismos de concientización y solidaridad. Estos esfuerzos, aunque enfrentaban desafíos considerables, representaron un intento de la comunidad por sobrellevar y resistir la violencia, tratando de crear espacios de paz y resguardando la autonomía frente a los grupos armados.

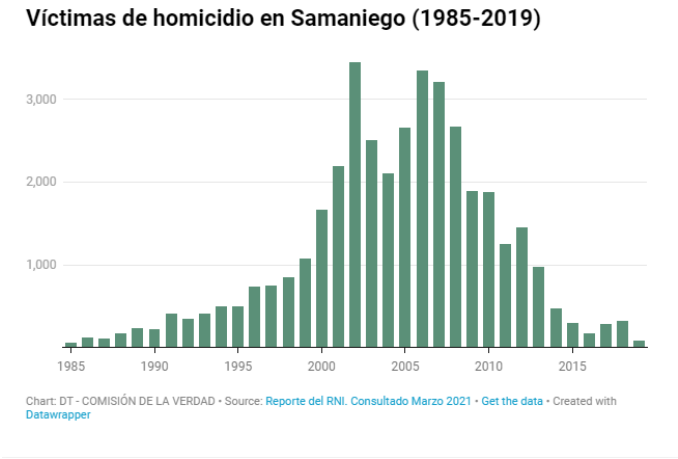

***Ilustración 3**. Grafica sobre las víctimas de homicidio en Samaniego (1985-2019) Tomado de Informe Final Comisión de la Verdad. Caso 83*

En 2003, Harold Montufar, candidato a la alcaldía, incluyó en su campaña una propuesta de paz, comprometiéndose a trabajar por la seguridad y la tranquilidad del municipio. Para el año siguiente y ya siendo alcalde, Montufar implementó un Pacto Local de Paz en el municipio de Samaniego, el cual incluía acuerdos entre algunos de los actores armados presentes en la región. Este pacto fue respetado tanto por las fuerzas del Estado como por los grupos armados ilegales, y logró reducir significativamente la violencia en el municipio durante los cuatro años que duró el acuerdo al establecerse que no se realizarían ataques contra la población civil ni las fuerzas policiales. El pacto fue reconocido en medios nacionales e internacionales y demostró la capacidad de la comunidad samanieguense para negociar y establecer acuerdos en favor de la paz. Además, Montufar propuso un plan de desminado humanitario, cuyo objetivo era proteger a la población de las minas antipersona sembradas en varias zonas del municipio.

En 2008, durante la administración de Yamile Montenegro, el Consejo Municipal de Paz fue formalizado mediante el Acuerdo Municipal N° 010 del 30 de mayo, en el marco de

la Ley 434 de 1998. Este consejo buscaba articular los esfuerzos de diferentes sectores de la sociedad en favor de la paz y promover actividades que mitigaran los efectos del conflicto en la comunidad. Ese mismo año, se creó el Comité de Derechos Humanos del Sector de la Montaña, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y al fomento de la paz en las zonas más afectadas por la violencia. Este comité también promovió la construcción del Cabildo Indígena de la Montaña, un espacio de representación indígena y de protección de los derechos de las comunidades.

Entre 2010 y 2015, surgieron diversas organizaciones sociales en Samaniego que, aunque no estaban formalmente unidas en un movimiento de paz, compartían objetivos en defensa de los derechos y la justicia social. Entre ellas se encontraban el Comité de Derechos Humanos de la Montaña, la Mesa Municipal de Mujeres, la Escuela Juvenil de Liderazgo, el movimiento cafetero y la Mesa Municipal de Víctimas. En 2013, una delegación significativa de campesinos e indígenas de Samaniego participó en el paro nacional agrario, manifestándose en defensa de sus derechos y de la protección de sus territorios. Estas movilizaciones demostraron la solidaridad de la comunidad y su capacidad de organización para enfrentar la violencia de manera no violenta.

En 2016, durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, la comunidad de Samaniego se unió en una serie de diálogos ciudadanos y talleres pedagógicos sobre el proceso de paz. En estos encuentros, participaron jóvenes, mujeres, líderes religiosos, organizaciones sociales y representantes de diversos sectores de la sociedad. Estos espacios de diálogo permitieron a la comunidad expresar su apoyo al "Sí" en el plebiscito por la paz y compartir sus expectativas sobre el post acuerdo. De estos encuentros surgió la idea de reactivar el Consejo Municipal de Paz y llamarlo ahora el

Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, el cual fue finalmente formalizado en 2017 bajo el Decreto Ley 885, producto del acuerdo de participación política de La Habana.

La reactivación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia consolidó un espacio formal para la participación ciudadana en favor de la paz en Samaniego. Este consejo ha sido fundamental para promover la reconciliación y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en el post acuerdo, permitiendo a los ciudadanos expresar sus expectativas y construir un proyecto de paz basado en las experiencias y aprendizajes de casi cuatro décadas de resistencia pacífica.

La historia de Samaniego evidencia una notable capacidad de resiliencia y organización comunitaria en la construcción de paz. A pesar de los desafíos y los ciclos de violencia que han azotado el municipio, la comunidad ha persistido en su lucha por la paz, empleando herramientas de diálogo, negociación y solidaridad para enfrentar el conflicto armado y proteger a su población. Los diversos movimientos, pactos, proyectos y organizaciones sociales que han surgido en Samaniego a lo largo de los años constituyen un legado de resistencia pacífica y son un testimonio de la importancia del compromiso ciudadano en la construcción de un futuro libre de violencia.

Caracterización de la resistencia civil antes del acuerdo

El conflicto armado en Samaniego, y los esfuerzos de resistencia civil han evolucionado notablemente en las últimas décadas. La manera en que las comunidades se han enfrentado a la violencia, especialmente antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, estuvo determinada por las circunstancias sociales, políticas y económicas del municipio como ya lo pudimos exponer anteriormente. Para comprender esta evolución,

es fundamental analizar las perspectivas de los participantes involucrados en el conflicto, quienes, con sus relatos, nos permiten comprender cómo la resistencia civil jugó un papel clave en el proceso hasta 2015.

Desde mediados de la década de 1980, Samaniego comenzó a ser afectado directamente por el conflicto armado, según el Participante 3, fue en ese periodo cuando "hicieron presencia los actores armados tales como ELN, FARC y paramilitares". La llegada de estos grupos, inicialmente percibida por algunos como una oportunidad para abordar las desigualdades socioeconómicas de la región, pronto derivó en un control coercitivo sobre la población.

El participante 2 enfatizó que, aunque la presencia de estos actores parecía estar motivada por la defensa de ideales populares, rápidamente "se convirtió en un régimen de violencia y miedo, bajo el cual se limitó cualquier capacidad de reacción comunitaria". Este deterioro de los principios iniciales de las guerrillas también fue señalado por el Participante 3, quie-n describe cómo el conflicto "degeneró los principios románticos y de lucha popular que pregonaban los actores armados".

El participante 1, ex alcalde de Samaniego nos ofrece una visión desde la perspectiva de la autoridad local, marcada por su experiencia en la administración del municipio en tiempos de intensos enfrentamientos. En sus relatos, destaca el impacto que los grupos armados tuvieron sobre la población y las decisiones políticas del momento. A diferencia de otros, el participante 1 no considera que la resistencia civil tuviera una presencia fuerte en Samaniego durante los primeros años del conflicto, afirmando que "antes, toda iniciativa fracasaba porque no había medios de comunicación y de concertación" lo que dificultaba cualquier intento de paz. Su relato refleja la dificultad de las autoridades para lidiar con los

actores armados y su escaso poder de negociación frente a la violencia que azotaba a la región.

Por otro lado, el participante 2, actual alcalde de Samaniego, quien también es ganadero y empresario presenta un enfoque político más radical, especialmente en relación con su postura hacia los grupos insurgentes y el gobierno central. Este participante tiene una fuerte inclinación política hacia la derecha y es crítico con el manejo del conflicto por parte del gobierno de turno. La opinión del participante 2 sobre las iniciativas de paz refleja esta perspectiva. A diferencia del participante 1, quien observa la resistencia civil desde una postura de neutralidad, el participante 2 tiene un claro posicionamiento frente al proceso de paz. Para él, los objetivos de las iniciativas de paz no han cambiado mucho con la firma del acuerdo, ya que las mismas tensiones persisten. "Realmente, muy poco han cambiado los objetivos de las iniciativas de paz. Los problemas siguen siendo los mismos, aunque ahora se habla más de diálogo," explica. Este comentario pone de manifiesto la postura más pesimista del participante 2, quien se muestra escéptico respecto a la efectividad de las soluciones planteadas en el acuerdo de paz. Es importante resaltar cómo en su relato se percibe una clara referencia a Álvaro Uribe, destacando su influencia en la política de la región. "La visión de Uribe, para mí, es clara: no hay que negociar con estos grupos, deben ser enfrentados con firmeza," agrega, subrayando así la postura más dura del participante 2 hacia el proceso de paz.

En contraste, el participante 3, un miembro de la fiscalía también muestra una postura crítica, pero desde una perspectiva más jurídica y de justicia. Aunque en su relato no destaca la importancia de la resistencia civil, se alinea con el participante 2 en la noción de que no ha existido una resistencia civil efectiva en el municipio. "A lo largo de los años, la resistencia

ha sido más bien simbólica, sin mucha acción concreta detrás," menciona, señalando la falta de una estrategia clara que involucre a la población civil de manera organizada. A pesar de su visión más técnica, el participante 3 reconoce que la sociedad civil ha tenido que adaptarse a los cambios impuestos por la presencia de los grupos armados. La falta de estructura organizacional que menciona el participante 3, podría ser una de las razones por las que la resistencia civil en Samaniego no fue tan visible en las primeras décadas del conflicto.

Finalmente, el participante 4, actual secretario de gobierno aporta una perspectiva diferente, aunque se encuentra en una posición de autoridad, su relato refleja el deseo de avanzar hacia una solución pacífica y la importancia del diálogo en este proceso. Según el participante 4, el conflicto armado en Samaniego comenzó a intensificarse a partir de la década de 1980, con la llegada de los grupos armados de izquierda como el ELN y las FARC. Para él, uno de los hitos más significativos en la historia del conflicto fue la participación activa de la sociedad civil en la resistencia pacífica, particularmente después de la muerte de un alcalde en 1994, lo que generó una serie de manifestaciones y protestas. "La sociedad civil empezó a jugar un papel determinante. Ya no solo eran los grupos armados enfrentándose al Estado, sino que la comunidad también se organizó y empezó a hacer valer su voz," dice el participante 4, resaltando la importancia de las primeras iniciativas de resistencia pacífica, las cuales sentaron las bases para los procesos de diálogo que se dieron más adelante.

En cuanto a los desafíos que enfrentaba la resistencia civil hasta 2015, el participante 4 menciona que la situación era compleja debido a la persistencia de la violencia y la falta de un espacio formal para el diálogo. "En esos tiempos, los esfuerzos de resistencia civil fueron limitados. La gente quería expresarse, pero la violencia se imponía," asegura el participante 4. Esta afirmación resalta la tensión constante entre la comunidad y los actores armados,

quienes controlaban muchas veces el espacio público y restringían la capacidad de los civiles para organizarse de manera efectiva.

En cuanto a los logros de la resistencia civil, todos los participantes coinciden en que, aunque hubo avances en términos de visibilidad y conciencia de la problemática, las soluciones definitivas aún eran inciertas. El P1 señala que la falta de mecanismos de concertación fue un factor que dificultó el progreso en las primeras etapas del conflicto, por otro lado, el P4 resalta los avances en la creación de espacios de diálogo en los cuales la sociedad civil pudo alzar su voz. "El Consejo de Paz se convirtió en un escenario donde todo era permitido, y eso fue un gran logro," destaca el P4, sugiriendo que este tipo de iniciativas representaron un avance significativo para la resistencia civil en el municipio, aunque no fueron suficientes para resolver el conflicto.

En conclusión, las perspectivas de los participantes sobre la resistencia civil en Samaniego, antes del acuerdo de paz con las FARC, reflejan un panorama de contradicciones y expectativas divergentes. Mientras algunos, como el participante 1 y el participante 2, ven el proceso con escepticismo, otros como el participante 4 se muestran más confiados en que la resistencia civil puede haber jugado un papel en la construcción de paz, aunque de manera limitada. La falta de recursos, de organización y la constante presión de los actores armados hicieron que la resistencia civil fuera una lucha difícil, pero no por ello menos significativa. La historia de la resistencia civil en Samaniego hasta 2015 deja claro que, aunque no se logró una solución definitiva, las comunidades de la región fueron testigos de esfuerzos significativos por parte de la sociedad civil para tomar la palabra y hacer valer su voz frente a la violencia y la opresión.

Caracterización de la resistencia civil después del acuerdo

Ahora bien, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, las dinámicas de la resistencia civil en Samaniego, Nariño, comenzaron a experimentar ciertas transformaciones, si bien el acuerdo fue un hito en la historia del país, en el municipio, las percepciones sobre la paz, la seguridad y la forma de resistir continuaron evolucionando. Según los testimonios recogidos, es evidente que la resistencia civil en este periodo estuvo influenciada por factores tanto internos como externos, y en particular por el proceso de diálogo nacional iniciado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.

El proceso de paz con las FARC fue una de las apuestas más grandes del gobierno de Santos, quien, después de años de fracasados intentos previos de negociación, logró avanzar en conversaciones serias con la guerrilla. El objetivo era no solo poner fin a la confrontación armada con el principal grupo insurgente del país, sino también transformar las estructuras sociopolíticas que alimentaban el conflicto. A pesar de los avances en la negociación, la implementación del acuerdo fue recibida con opiniones divididas, los participantes en las entrevistas señalan, de manera indirecta, cómo este proceso influenció las dinámicas locales.

El acuerdo de paz firmando en 2016 ha dejado huella en las comunidades locales, aunque las expectativas y realidades no siempre coinciden. El Participante 1, un ex alcalde de Samaniego expresa sus dudas sobre la efectividad inmediata del acuerdo en el municipio. En su relato, destaca que “Con la firma del acuerdo, hubo esperanza de que la situación cambiara, pero uno ve que los grupos ilegales siguen en las zonas rurales, entonces la paz no ha llegado de la manera que muchos pensaban.” Aunque no menciona explícitamente la implementación de los acuerdos, su visión es crítica respecto a la seguridad y el control territorial que no se ha visto reflejado a nivel local.

El P2, tiene una visión más pragmática sobre los resultados del proceso de paz en la región. En un claro tono de preocupación, señala que “El acuerdo de paz fue una victoria, sin duda, pero hasta ahora, los resultados han sido muy limitados en cuanto a lo que realmente necesitamos en el municipio. El problema de la violencia sigue existiendo, aunque con diferentes actores”. Además, menciona su posición política al referirse al expresidente Álvaro Uribe y la situación que enfrentan: “No podemos dejar que los acuerdos se queden en el papel. No he visto una verdadera implementación de lo que el gobierno de Santos prometió. Necesitamos una intervención real, no solo palabras, con Uribe este tipo de cosas no pasaban”. Esta declaración subraya las dificultades que persisten en Samaniego, incluso después de la firma del acuerdo.

Por su parte, el P3, comparte una postura más crítica respecto a la posibilidad de que la paz haya transformado la realidad local. Según él: “Desde que se firmó el acuerdo, uno pensaría que todo cambiaría, pero no ha sido así. La resistencia civil sigue siendo necesaria, pero ya no en las mismas formas que antes, ahora se ha institucionalizado un poco, pero la situación sigue siendo difícil. Los grupos armados continúan presentes”. Esta afirmación resalta cómo, aunque hay un cambio en la forma de organizar la resistencia, los problemas de violencia y control de territorio persisten, la respuesta institucional no parece haber sido suficiente para garantizar una paz real.

En el mismo sentido, el P4, hace hincapié en los esfuerzos organizados por la comunidad local, en su relato, describe cómo la sociedad civil sigue luchando por implementar cambios en el municipio, a pesar de la firma del acuerdo de paz, manifiesta que “Nosotros en el gobierno municipal tratamos de avanzar en muchos frentes. Después de la firma del acuerdo, tuvimos que generar más espacios de diálogo. Pero es muy difícil que, de

un día para otro, todo cambie. Las comunidades han tenido que encontrar sus propios mecanismos de organización, como los consejos de paz. Eso les ha permitido visibilizarse más ante el Estado." Su intervención muestra un lado positivo en cuanto a la organización de la resistencia civil, pero también refleja las dificultades para lograr avances sustanciales en la región.

Un aspecto clave que surge en las entrevistas es el papel de la resistencia civil en este periodo posterior al acuerdo de paz. A pesar de la formalización de las negociaciones y la creación de nuevas instituciones, la resistencia civil no ha desaparecido ni se ha vuelto innecesaria. En su lugar, ha cambiado de forma y ha adoptado nuevos modos de organización. El P1 observa que "La gente sigue resistiendo, pero ahora de una forma más organizada, más institucionalizada. Ya no es tan común que la gente se levante por una causa de manera espontánea. Ahora hay estructuras que los respaldan, como organizaciones sociales, consejos, fundaciones que luchan por la paz". La institucionalización de la resistencia civil parece haber sido un proceso fundamental, aunque no necesariamente sin complicaciones. Los líderes locales como él continúan involucrados en la lucha, pero a través de canales más formales.

Sin embargo, no todos los entrevistados coinciden en esta visión de la resistencia civil como un actor organizado. El P2 se muestra más escéptico, para él, la resistencia no ha logrado una transformación significativa. "Aunque se sigue hablando de resistencia civil, lo que yo veo es que las comunidades siguen viviendo con miedo. El narcotráfico no ha desaparecido, las disidencias de las FARC siguen operando, y la resistencia civil sigue siendo una respuesta a esos problemas". Su postura pone de manifiesto que el acuerdo de paz,

aunque importante, no ha resuelto los problemas estructurales que existían en la región, especialmente los relacionados con la violencia organizada.

De manera similar, el P3 aporta un punto de vista que resalta la falta de garantías para que la paz llegue de forma efectiva a los territorios más alejados, “El acuerdo no ha llegado con fuerza en las zonas rurales, es una de las grandes dificultades. La gente sigue organizándose de manera defensiva, pero no ha logrado una paz definitiva mientras los grupos ilegales sigan siendo una amenaza, no habrá paz real”. Aquí se hace evidente que, a pesar de los esfuerzos, la implementación de los acuerdos sigue siendo un desafío, particularmente en el ámbito local.

El sentimiento de que la paz está incompleta y en proceso se vuelve recurrente en los relatos de los participantes. Para el P4, el compromiso sigue siendo alto, aunque ve los resultados de manera más matizada: “Las comunidades han mejorado, pero las dificultades siguen. Las luchas por la tierra, por el control del territorio y la falta de recursos para los proyectos sociales siguen siendo grandes obstáculos”. La resistencia civil sigue siendo un instrumento importante para hacer frente a esos obstáculos.

En conclusión, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la resistencia civil en Samaniego continuó existiendo, pero adoptó formas más organizadas y con un enfoque en la institucionalización. A pesar de las expectativas que se generaron con la firma de los acuerdos, los problemas estructurales relacionados con el narcotráfico, la violencia y la falta de seguridad no se resolvieron de manera inmediata. Los testimonios de los participantes reflejan una comunidad que, aunque organizada, sigue luchando por el cumplimiento de lo pactado, mientras la implementación de los acuerdos sigue siendo percibida como insuficiente en el territorio.

Capítulo II

Comparación de la resistencia civil antes y post acuerdo de Paz.

En este segundo capítulo, se comparan y contrastan las perspectivas de los participantes sobre la resistencia civil en Samaniego, Nariño, tanto antes como después del Acuerdo de Paz con las FARC. Este análisis busca identificar coincidencias y diferencias en sus relatos, poniendo de manifiesto las tensiones entre las distintas narrativas y sus implicaciones para el entendimiento de la resistencia civil en este municipio.

Aunque los relatos varían según las vivencias de cada participante, se puede observar que dos de ellos (P2 y P3) niegan la existencia de resistencia civil en Samaniego. Ambos consideran que las acciones realizadas por la comunidad no cumplen con los requisitos de organización o efectividad suficientes para ser catalogadas como resistencia. Según P3, "Eso que pasó aquí, la verdad, no se puede llamar resistencia. Era más bien gente haciendo lo que podía, cada cual por su lado y sin lograr mucho". Esta posición contrasta directamente con la visión de P1 y P4, quienes enfatizan las estrategias colectivas que se adoptaron para proteger a la población y enfrentar las dinámicas del conflicto armado. En palabras de P4: "Pues tal vez no era algo organizado, pero claro que intentamos demostrar fuerza. Solo el hecho de quedarnos y no dejar que nos sacaran ya era resistir".

Antes del Acuerdo de Paz, las perspectivas también divergen en cuanto al protagonismo de la resistencia. P1, quien vivió el conflicto de manera directa como alcalde, resalta los esfuerzos comunitarios para negociar con los actores armados y evitar mayores daños a la población. Según su relato: "Era nuestra obligación buscar la manera de sobrevivir, incluso hablando con quienes nos atacaban. Había que pensar en la gente, no había de otra". Este enfoque de resistencia negociada contrasta con la percepción de P2, quien tiende a

minimizar estos esfuerzos y considera que lo que predominó fue el miedo y la sumisión frente a los actores armados. Por su parte, P4 recuerda con énfasis el papel de las comunidades indígenas y campesinas, quienes, según él, asumieron una postura de firmeza al negarse a abandonar sus territorios: "Nuestra resistencia fue quedarnos, cultivar, mostrar que no íbamos a desaparecer. Si nos íbamos, era como darles la victoria".

Después del Acuerdo de Paz, la polarización en los relatos se mantiene. P3, por ejemplo, sostiene que la resistencia perdió relevancia debido a que las dinámicas del conflicto cambiaron y los retos se trasladaron hacia la implementación del acuerdo. Según él: "Ya no hacía falta resistir, más bien lo que falta es que el gobierno cumpla con todo lo que prometió en esos acuerdos". Esta afirmación es cuestionada por P4, quien argumenta que la resistencia pero con un enfoque diferente, ahora dirigido a la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento de las instituciones locales. Para él, "Resistir hoy significa organizarnos mejor, luchar por nuestra voz y exigir lo que se prometió. No nos podemos quedar callados".

Un punto clave de comparación es el papel de la política en las narrativas de los participantes. Tanto P2 como P3 expresan posiciones políticas inclinadas hacia la derecha y hacen comentarios críticos sobre el proceso de paz liderado por el expresidente Santos. P2, por ejemplo, menciona que "Esos acuerdos solo sirvieron para fortalecer a los enemigos del país. Nosotros quedamos más abandonados que antes". Esta postura se diferencia de la de P4, quien, aunque también cuestiona algunos aspectos de la implementación, destaca los avances logrados en términos de disminución de la violencia directa: "Claro que no todo ha salido bien, pero antes vivíamos con miedo constante, ahora tenemos algo de tranquilidad para pensar en el futuro".

Otra diferencia significativa radica en cómo se percibe la participación comunitaria después del acuerdo. P1, desde su perspectiva histórica, lamenta que las generaciones más jóvenes parecen estar menos involucradas en las luchas colectivas: "En mi época, todos sabíamos que nuestra supervivencia dependía de la unión; ahora veo más apatía". Sin embargo, P4 discrepa, argumentando que los jóvenes están adoptando nuevas formas de organización, especialmente a través de medios digitales y redes sociales, lo que él considera una evolución natural de la resistencia: "Los pelados de ahora no hacen reuniones como antes, pero mire que están en internet, haciendo campañas y moviendo cosas. Eso también es resistencia".

Por otro lado, la percepción del éxito o fracaso de las iniciativas comunitarias también marca diferencias significativas entre los participantes. Mientras que P1 y P4 resaltan los logros obtenidos, como la continuidad de actividades agrícolas y educativas en medio de las dificultades, P2 y P3 insisten en que estas iniciativas fueron insuficientes o incluso ineficaces. P3 señala que "Ni los comités ni las reuniones trajeron cambios reales; solo eran paliativos que no resolvían la raíz del problema". Frente a esta opinión, P4 sostiene que "Mire, tal vez eran cosas pequeñas, pero ayudaban a mantener la esperanza y el sentido de comunidad. Y eso no es poco, eso también cuenta".

En síntesis, los relatos de los participantes muestran una diversidad de perspectivas sobre la resistencia civil en Samaniego, influenciadas por sus experiencias personales, posiciones políticas y roles en el conflicto. Mientras unos minimizan o niegan la existencia de resistencia, otros la reivindican como una constante, aunque en transformación. Estas tensiones reflejan las complejidades del fenómeno y destacan la necesidad de un análisis

matizado para comprender cómo las comunidades enfrentan los retos impuestos por la violencia y la construcción de paz.

Conclusiones

Así, continuando con el desarrollo de esta investigación se presentan las conclusiones, aportes y limitaciones de este estudio con base en el objetivo general y los objetivos específicos planteados en un principio.

A lo largo de este trabajo se ha examinado la resistencia civil en Samaniego, Nariño, un municipio que, al igual que muchas otras regiones de Colombia, ha sido profundamente afectado por el conflicto armado desde los inicios del conflicto armado en el departamento en la década de 1980 hasta el periodo posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. En este periodo se identificó que *la resistencia civil en Samaniego ha sido una constante a lo largo del conflicto*, aunque ha adoptado diferentes formas y estrategias a lo largo del tiempo. Antes del Acuerdo de Paz, la resistencia se caracterizó por la negociación con actores armados, la protección de la población civil y la defensa del territorio. Después del acuerdo, la resistencia se ha enfocado en la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las instituciones locales y la exigencia del cumplimiento de lo pactado.

Y que, además, *ha estado influenciada por factores internos y externos, incluyendo la presencia de actores armados, las políticas del gobierno nacional y el proceso de paz con las FARC.* La llegada de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN en la década de 1980 marcó el inicio de un ciclo de violencia que obligó a las comunidades a buscar estrategias de supervivencia y el posterior ingreso de grupos paramilitares intensificó la violencia y generó un clima de terror en la región (Moully y Garrido, 2018). A pesar de las adversidades, como lo mencionó el P3 la comunidad de Samaniego logró desarrollar mecanismos de resistencia pacífica para proteger a la población civil.

La resistencia civil en Samaniego ha demostrado la capacidad de la comunidad para organizarse, movilizarse y defender sus derechos en medio del conflicto armado. Desde las marchas por la paz en la década de 1990 hasta la creación de organizaciones sociales y consejos comunitarios, la resistencia civil ha sido un factor clave en la protección de la población, la promoción del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto. La historia de la resistencia civil en Samaniego es un testimonio del compromiso de la comunidad con la construcción de una paz justa y duradera.

No obstante, a pesar de los avances, *las perspectivas sobre la resistencia civil en Samaniego son diversas y en ocasiones contradictorias.* Algunos participantes en el estudio, como el P2 y P3, niegan la existencia de una resistencia organizada y efectiva, argumentando que las acciones comunitarias fueron más bien respuestas aisladas al miedo y la violencia. Lo anterior, contrasta con la de otros participantes, como el P1 y el P4, quienes destacan los esfuerzos colectivos para proteger a la población, negociar con actores armados y mantener la vida social y económica en medio del conflicto.

Estas diferencias de opinión reflejan la complejidad del fenómeno de la resistencia civil y la importancia de considerar múltiples perspectivas para comprenderlo ya que, es fundamental reconocer que *la resistencia civil no siempre se manifiesta de forma visible o a través de grandes movilizaciones*. En ocasiones, las acciones más pequeñas y cotidianas, como la decisión de quedarse en el territorio, cultivar la tierra o mantener las tradiciones culturales, pueden ser formas de resistencia frente a la violencia y la opresión.

La experiencia de Samaniego nos muestra que *la resistencia civil es un proceso dinámico y en constante evolución*, que se adapta a las circunstancias y enfrenta diversos desafíos. A pesar de las dificultades, la resistencia civil ha sido y sigue siendo un factor fundamental en la búsqueda de la paz en Colombia, demostrando la capacidad de las comunidades para transformar su realidad y construir un futuro mejor. La resistencia no ha sido un camino fácil, pero ha dejado importantes aprendizajes y ha sentado las bases para la construcción de una paz duradera, en estos procesos la comunidad ha demostrado su capacidad para organizarse, movilizarse y defender sus derechos, incluso en los momentos más difíciles.

En esa línea, esta investigación sobre la evolución de la resistencia pacífica en Samaniego, Nariño, ofrece una serie de aportes relevantes para comprender las dinámicas del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia entre ellos, permite visibilizar las experiencias locales de resistencia que a menudo son invisibilizadas por los grandes relatos del conflicto armado que se concentran en ciertos departamentos en específico. Esta investigación ha permitido poner la mirada en una zona del país que sigue presentando altos índices relacionados con el conflicto armado, y una desatención institucional; en esos contextos emergen procesos organizativos para resistir a la guerra, para sobrevivir los cuales pueden propiciar aprendizajes u oportunidades para otras comunidades en el país que pasan por situaciones similares. En ese orden, es preciso mencionar que esta investigación no profundizo las iniciativas que se están llevando a cabo actualmente por la Gobernación del departamento durante esta vigencia 2024-2028 la cual se ha articulado con los procesos de paz total del gobierno nacional, sin embargo seria interesante que en investigaciones futuras

se pueda investigar el impacto o las articulaciones que los procesos o iniciativas locales pueden generar con el nivel departamental o nacional en lo relacionado a la resistencia civil.

Por otra parte, se puede añadir que la investigación se basa en un número limitado de entrevistas, lo que puede haber influido en la representatividad de los resultados. A pesar de ello, esta investigación representa un aporte valioso al campo de los estudios de paz y conflicto en Colombia. El estudio ofrece una comprensión más profunda de la resistencia civil como un proceso dinámico y complejo, y destaca la importancia de la participación comunitaria en la construcción de una paz duradera.

Las guerras las ganan siempre los hombres de paz, nunca los jaleadores de la guerra. Sólo es valiente quien puede permitirse el lujo de la animalidad que se llama amor al prójimo, y es lo específicamente humano».

Hector Abad Faciolince – El olvido que seremos.

Bibliografía

Arjona, A. (2017). *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge University Press.

Baena, M. (2015). La prospectiva: Un proceso de construcción de sentido. En Estudios de Prospectiva (pp. 74). Editorial Universidad.

Callejas, J. S. Z, Sanin, J. (2013) Otras perspectivas sobre el conflicto en la comuna 13 de Medellín (Colombia): enfoques biopolíticos, seguritarios y de resistencia civil.

Caicedo, M. C. (2021). *Conflicto armado, cultura y resistencia: Un estudio exploratorio sobre las comunidades negras del Pacífico colombiano* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana.

Fearon, James, Kasara, Kimuli y Laitin, David (2007). "Ethnic minority rule and civil war onset." En American Political Science Review, V. 101, No. 1. Pp. 187-193.

FUNDEPAZ. (2021). Informe anual sobre la situación de los derechos humanos y el DIH en Nariño. Fundación Desarrollo y Paz.

Guber, R. (2011). La etnografía: método, campo y reflexividad. Siglo Veintiuno Editores.

Gurr, T. R. (1978). *The Calculus of Civil Conflict*. Princeton University Press.

Hancock, L., & Mitchell, C. (2007). Zones of Peace. Kumarian Press.

Hernández Delgado, E. (2006). La resistencia civil de los indígenas del Cauca. Papel político, 11(1), 177-220.

Hernández Delgado, E., & Roa Mendoza, C. P. (2019). Civil resistance and peacebuilding: The experience of the Peasant Worker Association of the Carare River. In C. Mouly & E. Hernández Delgado (Eds.), Civil Resistance and Violent Conflict in Latin America (Studies of the Americas, pp. 137-158). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05033-7_7

INDEPAZ. (2024). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Recuperado de https://indepaz.org.co

Jurado, G. S. B. (2011). El conflicto armado y El desplazamiento forzado En Putumayo y Nariño, Colombia. El desarrollo rural en México y Colombia, 137.

Kaldor, M. (2013). *Nuevas guerras: Violencia organizada en la era global*. Editorial Taurus.

Kalyvas, S. N. (2006). *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge University Press.

Kalyvas, Stathis (2009). "El carácter cambiante de las guerras civiles 1800 - 2009", en Colombia Internacional 70, julio-diciembre. Pp. 193- 214.

Kaplan, O. (2013). *Protecting Civilians in Civil War: The Institution of the ATCC in Colombia*. En J. Goodhand, B. Korf, & O. Walton (Eds.), *Civil War and the Transformation of Social Orders* (pp. XX-XX). Cambridge University Press.

Kaplan, O. (2017). Resisting War: How Communities Protect Themselves. Cambridge University Press.

Lasso Urbano, Carlos, & Cabello-Tijerina, Paris A. (2022). Dialéctica del conflicto armado en el departamento de Nariño, Colombia en tiempos de paz, lecciones para la

construcción de una Paz Histórica. Justicia, 27(41), 1-12. Epub June 30, 2022.https://doi.org/10.17081/just.27.41.5757

Lee, R. M. (1993). Doing research on sensitive topics. Sage.

Martinez Bernal, D. R. (2016). La resistencia y la resistencia civil: la importancia de la teoría noviolenta. Papel Político, 21(2), 343–371. https://doi.org/10.11144/javeriana.papo21-2.rrci

Masullo, J. (2017). *Alternative Forms of Civilian Noncooperation with Armed Groups*. Journal of Peace Research, 54(5), 536–549. doi:10.1177/0022343317722626

Masullo, J., Mouly, C., & Garrido, M. B. (2019). Alternative forms of civilian noncooperation with armed groups: The case of Samaniego in Colombia. En C. Mouly & E. Hernández Delgado (Eds.), Civil Resistance and Violent Conflict in Latin America (pp. 111-133). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05033-7_6

Medina Medina, J. S. (2019). *Resistencia civil y control territorial de la comunidad indígena Nasa frente a los grupos armados ilegales: Jambaló, Cauca, Colombia 2015-2019* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.

Melo-Pinzón, G. (2004). La identidad y la ciudadanía en América Latina: la resistencia civil y pacífica indígena colombiana bajo el fuego cruzado. línea], en La Chronique des Amériques, (32).

Mouly, C. (2014). *Como toma forma la paz localmente: La experiencia de resistencia civil en Samaniego, Colombia*. Revista Colombiana de Sociología, 41(1), 45–62.

Mouly, C., Idler, A., & Garrido, B. (2015). Zones of Peace in Colombia's Borderland. International Journal of Peace Studies, 20(1).

Mouly, C., & Garrido, M.B. (2018). No a la guerra: resistencia civil en dos comunidades periféricas de Colombia. Desafíos, 30(1), 245-277. Doi: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.5282

Nasi, C., Ramírez, W., & Lair, E. (2003). La guerra civil. *Revista de estudios sociales*, (14), 119-124.

Osorio, F. E. (2001). Entre la supervivencia y la resistencia: Acciones colectivas de población rural en medio del conflicto armado colombiano. Cuadernos de Desarrollo Rural, 47, 55–80.

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Liberabit, 13(13), 71-78.

Universidad Nacional de Colombia. (2003). Los debates sobre la resistencia civil: ¿qué es y qué no es? In M. Calle (Ed.), Memorias I Encuentro Internacional de Resistencia Civil: estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización (pp. 30–86). Programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia. Universidad Nacional

Urbina, E. C. (2020). Investigación cualitativa. *Applied Sciences in Dentistry*, *1*(3).

Webgrafía

https://www.elpais.com.co/colombia/las-voces-de-la-guerra-los-relatos-de-victimas-de-la-violencia-de-samaniego-narino.html

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/unos-1-000-desplazados-por-hombres-armados-llegaron-a-samaniego-narino-793477

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53801935

https://reliefweb.int/report/colombia/evaluacion-rapida-de-necesidades-ern-samaniego-narino-11102023

https://www.fundepaz.org/el-conflicto-en-narino-una-fabrica-de-victimas-de-nunca-acabar/

https://www.comisiondelaverdad.co/caso-83-conflicto-armado-en-samaniego

https://www.comisiondelaverdad.co/nacen-las-autodefensas-unidas-de-colombia-auc

https://rutasdelconflicto.com/masacres/samaniego

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/

Anexos

Cuestionario (anexo 1)

PREGUNTAS ENTREVISTAS

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE RESISTENCIA PACÍFICA EN SAMANIEGO, NARIÑO: UN ANÁLISIS EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ (1997-2020)

1. EDAD
2. OCUPACIÓN
3. ROL EN EL CONFLICTO: DIRECTO/INDIRECTO – PARTICIPANTE/OBSERVADOR, AUTORIDAD 7 ACADEMICO

PREGUNTAS

OBJETIVO 1

Antecedentes:

1. ¿Cuándo y cómo comenzó a afectar el conflicto armado a la población de Samaniego?
2. ¿Cómo ha sido la evolución del conflicto armado en el municipio de Samaniego a lo largo de los años (1997- 2008) (2016-2024)?
3. ¿Qué grupos armados han tenido presencia en Samaniego y cómo ha sido su relación con la comunidad local?
4. ¿Cómo era la situación social y económica de Samaniego antes y después de que el conflicto armado se intensificara?
5. ¿Cómo ha sido la relación entre el municipio y las entidades del Estado durante el conflicto y en el proceso de construcción de paz?

6. ¿Cómo afectó el conflicto armado a la vida cotidiana y qué papel jugó la comunidad en mantener o cambiar la dinámica del conflicto?

Caracterización del proceso de resistencia civil antes del acuerdo de paz:

1. ¿Cómo describiría la situación de resistencia civil en Samaniego antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC? ¿Cuáles fueron las principales formas de resistencia civil que se implementaron en Samaniego entre 1997 y 2008, y cómo se justificaban estas acciones dentro de la comunidad?

2. ¿Qué actores sociales o comunitarios lideraban estas iniciativas de resistencia?

3. ¿Las iniciativas de resistencia dieron lugar a alguna organización comunitaria? ¿Cuál? ¿Cómo funciona? ¿sigue funcionando actualmente?

4. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades de organizarse para resistir a la violencia y los actores armados? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo?

5. ¿De qué manera las experiencias previas de conflicto armado influenciaron la forma en que la comunidad se organizó para resistir pacíficamente?

6. ¿Qué papel jugaron las tradiciones locales y la cultura en la definición de lo que significa "iniciativas de paz" antes y después del acuerdo de paz?

7. ¿De qué forma las iniciativas de paz cambiaron la relación de la comunidad con las autoridades estatales y otros actores armados? ¿Esto facilito o dificulto la resistencia civil?

Caracterización posterior al acuerdo de paz:

1. ¿Qué iniciativas de resistencia civil se han observado en Samaniego después de la firma del acuerdo de paz en 2016 y cómo se diferencian de las anteriores?

2. ¿Cómo ha cambiado la participación de la comunidad en las iniciativas de paz después de la firma del acuerdo?

3. ¿Qué impacto ha tenido el acuerdo de paz en la organización y movilización de la resistencia civil o iniciativas de paz?

4. Desde su perspectiva, ¿cómo se han transformado los valores y motivaciones que impulsan la resistencia civil en Samaniego tras la firma del acuerdo?

OBJETIVO 2

Comparación antes y después del acuerdo de paz:

1. ¿Cuáles considera que son las principales diferencias entre las iniciativas de paz en Samaniego antes y después del acuerdo de paz con las FARC?

2. ¿Han cambiado los objetivos de las iniciativas de paz con la firma del acuerdo de paz? Si es así, ¿cómo?

3. ¿Cómo ha evolucionado el papel de las organizaciones comunitarias o civiles en el proceso de resistencia desde 1997 hasta la actualidad?

4. ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la resistencia civil en Samaniego y cómo difieren de los desafíos del período anterior a 2016?

5. ¿Qué estrategias han utilizado las comunidades para resistir a la violencia antes y después del acuerdo de paz? ¿Cómo han cambiado las estrategias de resistencia? ¿Han surgido nuevas formas de resistencia o se han adaptado las existentes? ¿Hay diferencias significativas en cómo se toman decisiones colectivas respecto a la resistencia?

6. ¿Ha cambiado la percepción de la comunidad sobre la resistencia civil con el tiempo? Por ejemplo, ¿era vista como una necesidad antes del acuerdo y ahora como una opción para fortalecer la paz?

Impacto y perspectivas futuras:

1. ¿Qué resultados o logros se pueden identificar en la resistencia civil de Samaniego tanto antes como después del acuerdo de paz?

2. ¿Cuáles son las expectativas o esperanzas de la comunidad con respecto al proceso de paz actual y el fortalecimiento de la resistencia civil?

3. ¿Cómo visualiza el futuro de las iniciativas de resistencia civil en Samaniego en los próximos años?

Consentimiento informado (anexo 2)

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACION DE HERRAMIENTA DE ENTREVISTA

Yo _ identificado/a con documento de identidad No _ en calidad de ENTREVISTADO, manifiesto que:

He recibido toda la información necesaria de forma confidencial, clara, comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y proposito de los objetivos y metodología de trabajo que se llevaran a cabo en el espacio de ENTREVISTA ABIERTA, la cual tengo pleno conocimiento será de uso exclusivo para fines académicos como parte de un PROYECTO DE TESIS y comprendo que tengo derecho a recibir respuesta sobre cualquier inquietud que tenga antes, durante y después de su ejecución. Por lo que AUTORIZO a la estudiante de la carrera universitaria de CIENCIA POLITICA de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali, ANNA SOFIA SANTACRUZ CHAVES identificada con documento No. 1085346607 de Pasto, a que lleve a cabo su intervencion con mi persona y adicionalmente, como solicitud personal, expreso que SI__ NO__ deseo que mis datos personales (Nombre, Edad, Género) sean utilizados y expuestos durante la sustentacion del trabajo.

_____- _____-

Firma de entrevistado. Fecha: